



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 5761/2015/CA7

//doba, 19 de mayo de 2022.

**Y VISTOS:**

Estos autos: "**BRACHETTA, GUSTAVO VICTOR; BERTERO, LIDIA BEATRIZ; BRACHETTA, GUSTAVO NICOLAS; BRACHETTA, ALBERTO; BRACHETTA, SANTIAGO ALBERTO SOBRE ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL Y OTROS**" (Expte. N° FCB 5761/2015/CA7)", venidos a conocimiento de la Sala "A" del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por el Fiscal Federal, doctor Carlos María Casas Nóbrega y por el abogado Roberto Alejandro Bustos Marún en representación de la querellante AFIP-DGI en contra de la resolución dictada con fecha 9 de noviembre de 2020 por el señor Juez Federal de N° 3 de Córdoba, en la que decidió: "**RESUELVO: (...) IV. ORDENAR EL SOBRESEIMIENTO de Gustavo Víctor Brachetta, Gustavo Nicolás Brachetta, Santiago Brachetta, Alberto Rafael Bianchetta, Guillermo Borio y Enrique Rubén Juncos, filiados precedentemente, en orden al delito de lavado de activos agravado (art. 303, punto 1 y 2 inc. "a" del C.P.) por el cual fueran indagados (conf. art. 336 inc. 3° del C.P.P.N.), seis hechos en concurso real (art. 55 del C.P.), en relación a los hechos nominados 2°, 3°, 4°, 5°, 7° y 9°.(...) VI. SOBRESEER LA PRESENTE CAUSA en favor de Gustavo Víctor Brachetta, Gustavo Nicolás Brachetta, Santiago Brachetta, Alberto Rafael Bianchetta, Guillermo Borio y Enrique Rubén Juncos, filiados precedentemente, en orden a los delitos de asociación ilícita (art. 210 del C.P.) y asociación ilícita tributaria (art. 15 inc. "c" de la ley 24.769), en relación a los hechos nominados 1° y 6° respectivamente, conforme a lo dispuesto en el art. 336 inc. 3° del C.P.P.N. VII. Protocolícese y hágase saber.- Fdo: MIGUEL HUGO VACA NARVAJA, JUEZ FEDERAL, Ante mí: MARIANA BUTELER, SECRETARIA**".

**Y CONSIDERANDO:**

Fecha de firma: 19/05/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#24640408#327518420#20220519131403960

I. Arriban los presentes autos a esta Alzada en virtud de los **recursos de apelación presentados por el Fiscal Federal** doctor Carlos María Casas Nóbrega y por el abogado Roberto Alejandro Bustos Marún en representación de la querellante AFIP-DGI en contra de la resolución dictada con fecha 9 de noviembre de 2020 por el señor Juez Federal de N° 2 de Córdoba, cuyo fragmento resolutivo ha sido transcripto precedentemente.

Con relación a los hechos **segundo, tercero, cuarto, quinto, séptimo y noveno**, en su resolución el Juez de la causa sostuvo que no se encuentra configurado el delito de lavado de activos agravado, especialmente considerando que no se ha demostrado que los capitales o fondos con los cuales se realizaban las operaciones bursátiles fueran de origen ilícito y que la intención de los encartados haya sido darles una apariencia lícita.

Respecto de los hechos **primero y sexto**, el magistrado interviniente indicó que la sociedad en cuestión realizaba principalmente operaciones bursátiles, para las cuales sí se encontraba autorizada, y que además se comprobó que, paralelamente algunos de los socios y/o empleados, en forma irregular, realizaban operaciones de cambio, compraventa de moneda extranjera, en infracción a las disposiciones del Régimen Penal Cambiario (Ley 19.359).

Sobre dicha cuestión, expresó que no surge de la causa de marras que tales actividades cambiarias se presenten como parte de un plan delictivo elaborado previamente por los imputados en el marco de una asociación ilícita.

Asimismo, manifestó que no se hallan acreditados los extremos para considerar que las acciones descriptas en el requerimiento fiscal constituyan el delito de lavado de ~~activos agravado, razón por la cual se dispuso el~~

Fecha de firma: 19/05/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#24640408#327518420#20220519131403960



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 5761/2015/CA7

sobreseimiento de los imputados Gustavo Víctor Brachetta, Gustavo Nicolás Brachetta, Santiago Brachetta, Alberto Rafael Bianchetta, Guillermo Borio y Enrique Rubén Juncos.

Por ello, concluyó que tampoco puede reprocharse a los nombrados un pacto de voluntades para cometer este tipo de delito en contra el orden económico y financiero.

Por último, entendió que tampoco se vislumbra un pacto o acuerdo por parte de los imputados para perpetrar delitos de evasión, retención indebida de tributos y/o aportes, simulaciones dolosas de pago o cualquiera de los ilícitos tipificados en la ley penal tributaria, y que, para ello se sirvan de la estructura de una sociedad legítimamente constituida como "Compañía de Inversiones Bursátiles S.A.".

**II.** El representante del **Ministerio Público Fiscal** en su recurso de apelación expresó que el Juez de primera instancia ha resuelto sin realizar una adecuada valoración de la abundante prueba obrante en autos y ha utilizado fundamentos que no se ajustan a las constancias de la causa.

En tal sentido, citando jurisprudencia de la Cámara de Casación Penal expresó que el sobreseimiento dispuesto no se encuentra fundado con la certeza negativa del acaecimiento de los hechos en cuestión para que el juzgador pueda -con la debida convicción- emitir un juicio asertivo, una afirmación y no una mera suposición o conjetura sobre la adecuación o no de esa realidad histórica a las figuras delictivas imputadas.

Asimismo, indicó que a su entender existen sobrados elementos para sostener que la instrucción no llega a nivel de certeza negativa, por lo que solicita que se continúe con el proceso por parte del juzgado instructor, como ya ~~señaló este Tribunal con fecha 21 de diciembre de 2018 al~~

Fecha de firma: 19/05/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#24640408#327518420#20220519131403960

declarar la nulidad absoluta e insubsanable de una resolución similar dictada en estos autos por el Juez Federal N° 1 de Córdoba con fecha 27 de febrero de 2018.

Además, manifestó que tampoco fueron atendidos cada uno de los pormenorizados y contundentes fundamentos que dio esta Cámara Federal, toda vez que desde que asumió la dirección de la investigación, no ha llevado adelante medidas que impulsen la instrucción y permitan dilucidar la situación real de los hechos.

Al respecto, mencionó algunos conceptos expuestos en dicho pronunciamiento por el Dr. Ignacio María Vélez Funes, y por la Dra. Graciela Montesi, a los que se remite por razones de brevedad.

En cuanto a la ausencia de la ponderación de la prueba obrante en autos, aduce falta total de consideración de las intervenciones telefónicas obrantes en autos en las cuales surge claro no solo el vínculo de los imputados entre sí, que da cuenta de la voluntad común para llevar a cabo un accionar ilícito mancomunado, sino también la estructura de poder en tal asociación, en la cual había instrucciones generales y particulares para llevar a cabo las maniobras ilícitas y hasta para encubrir las de potenciales averiguaciones, como es, a su entender el caso de Gustavo Víctor Brachetta, Guillermo Borio, entre otros.

Por ello, considera que se está frente a un caudal probatorio de indicios claros, precisos y concordantes que dan mérito a un procesamiento en cuanto al tipo penal de Asociación ilícita, todo lo cual indica, a su parecer la arbitrariedad del auto impugnado.

Respecto de los sobreseimientos dictados con relación a los hechos de lavado de activos de origen delictivo, manifestó que se ha efectuado una valoración ~~parcial de los relatos testimoniales propuestos por la~~

Fecha de firma: 19/05/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#24640408#327518420#20220519131403960



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 5761/2015/CA7

defensa y de las conclusiones arribadas por las inspecciones fiscales realizadas a algunos comitentes que determinó que no se ha logrado determinar el origen ilícito de los fondos en cuestión, pese a haberse llevado adelante la acreditación de una manera irregular conforme la reglamentación vigente al momento (RG N° 692 de la Comisión Nacional de Valores y art. 20, inc. 4 de la ley 25.246).

Lo mismo dijo respecto de las numerosas intervenciones telefónicas donde los encartados refieren a operatorias por fuera del sistema legal como así también no se hayan emitido los reportes de operación sospechosa a la Unidad de Información Financiera ante tales operaciones.

En este punto, indicó que nunca se tuvo en cuenta que en la determinación y cuantificación de dichas operaciones deberá valorarse no sólo los importes que fueron depositados en las cuentas bancarias de COMPAÑÍA DE INVERSIONES BURSÁTILES S.A., sino también aquellos montos respecto de los cuales no existe tal constancia documental, habida cuenta que la empresa COMPAÑÍA DE INVERSIONES BURSÁTILES S.A. recibiría y operaría con dinero en efectivo para la compra y venta de valores negociables, pese a la normativa legal que los prohíbe, conforme lo expuso la Dra. Graciela Montesi en su voto.

Señaló que, contrariamente al señor juez de la causa le bastó la cita de una declaración testimonial brindada por un ex gerente del Mercado de Valores de Córdoba S.A. vinculado con Gustavo Víctor Brachetta conforme sus años en el mercado bursátil y la aplicación de un antecedente jurisprudencial que declaró inconstitucional el art. 2 de la ley anti-evasión, el cual fue analizado parcialmente y no en conjunto con los demás elementos reunidos, todo lo cual estima que se trata de un ~~razonamiento viciado.~~

Fecha de firma: 19/05/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#24640408#327518420#20220519131403960

Sobre dicha cuestión, hizo alusión nuevamente al voto del Dr. Dr. Ignacio María Vélez Funes acerca de los incumplimientos de diversas normativas y demás manejos irregulares de la firma bursátil investigada.

Sumado a ello, destacó que respecto del secuestro de dinero en efectivo oculto en cajas de cartón en las distintas oficinas producto de los allanamientos -siete millones de pesos (\$7.000.000) y trescientos cincuenta mil dólares (Usd 350.000- nunca pudo acreditarse su origen, por lo cual indicó que, a su entender, resulta cuanto menos una subestimación a la inteligencia de este Ministerio Público Fiscal y a la de los jueces de la propia Cámara Federal, que le hayan solicitado el primero y ordenado el segundo analizar material convictivo conforme la prueba que han tenido a la vista, y que el Juez instructor haya obviado las consideraciones del Superior, sobreseyendo de culpa y cargo a los acusados, con pruebas más que evidentes.

Agregó, sobre este tópico que considera ocioso agregar que en el mundo bursátil no existe ninguna posibilidad de manejar dinero físico de tal magnitud por expresas directivas bursátiles y bancarias, precisamente para que todas las operaciones queden bancarizadas y evitar así diferentes tipos de delitos como evasiones y lavados de activos.

Desde otro costado, expuso que la consideración de apartar los hechos de lavado basándose en los resultados expuestos por la inspecciones realizadas por el Organismo Fiscal, no sólo se encuentra en los hechos de evasión que se endilgaran a los imputados o a las resultas de un acogimiento al Régimen de Sinceramiento Fiscal por parte de particulares, sino también atañe a los restantes hechos ilícitos que le fueran atribuidos y cuya existencia se fundamenta en los elementos de prueba reunidos en autos.

Fecha de firma: 19/05/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#24640408#327518420#20220519131403960



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 5761/2015/CA7

En orden a todo lo expuesto, señaló que el decisorio del Juez no se sustenta en la prueba esencial colectada en autos y esboza razones y argumentos que no se ajustan a las constancias de la causa menoscabando el deber de motivación suficiente previsto en el art. 123 del CPPN y que la resolución en cuestión dispone el sobreseimiento de todos los imputados de la causa, razón por la cual tal decisión debe ser el resultado de un verdadero examen crítico y valorativo de toda la prueba que se encuentra legalmente incorporada para alcanzar el estado intelectual de certeza negativo necesario.

Por otro lado, hizo mención al tiempo que lleva esta investigación. Sobre dicha cuestión, expuso que el paso del tiempo se ha cobrado la extinción de la acción penal por prescripción de ciertas conductas delictivas, lo cual ha denotado la deficiencia del Estado en dar una pronta respuesta a la sociedad y a los justiciables.

Finalmente, refirió que han pasado casi dos años de la resolución de la Cámara Federal que marcó un camino que debía ser observado por el Instructor y que nuevamente la causa se empantanó requiriendo que la Cámara vuelva a decir, lo que ya dijo, por lo cual, solicitó que se tomen los recaudos necesarios para evitar que situaciones como estas se repitan, en causas de envergadura penal económica, que afectan bienes jurídicos complejos y evitar la impunidad de los mismos.

**III.** Por su parte, la **querellante AFIP-DGI** al momento de expresar agravios indicó que los mismos se vinculan con una errónea aplicación de la ley penal sustantiva aplicable al caso y de una incorrecta valoración de la prueba rendida en autos.

Asimismo, sostuvo, como cuestión previa, que la ~~decisión impugnada es nula por~~ carecer de debida

Fecha de firma: 19/05/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#24640408#327518420#20220519131403960

fundamentación legal de conformidad con lo previsto por el art. 123 del CPPN.

Indicó, por otro lado que en la resolución impugnada se ha incurrido en errónea aplicación de la ley sustantiva, toda vez que el sobreseimiento dictado en favor de los imputados por haberse extinguido la acción penal correspondiente a los hechos nominados segundo, tercero, cuarto, quinto, séptimo y noveno, por prescripción, lleva consigo que no pueda sostenerse la existencia de una asociación ilícita criminal destinada a cometer delitos.

Refirió al respecto que tanto la jurisprudencia como la doctrina, pacíficamente sostienen que tanto el delito previsto en el art. 210 del Código Penal como el dispuesto en el art. 15 inc. C del Régimen Penal Tributario son independientes de los particulares delitos que la asociación tenga por fin cometer y que un pronunciamiento contrario desconoce la autonomía de las figuras penales de asociación ilícita y asociación ilícita fiscal. En tal sentido, expresó que tanto la doctrina como la jurisprudencia sostienen pacíficamente que los delitos del art. 210 del CP y del art. 15 inc. c) del régimen penal tributario, son independientes de los particulares delitos que la asociación tenga por fin cometer.

Asimismo, indicó que la expresión vertida en la resolución recurrida, respecto a que no se vislumbra un acuerdo entre los imputados para cometer delitos fiscales porque "la mayoría de las inspecciones ordenadas en las presentes actuaciones, conforme a lo dispuesto en el art. 18 de la ley 24.769, no pudieron avanzar, por encontrarse con el obstáculo de que los contribuyentes investigados se habían adherido a la ley de blanqueo de capitales (Ley 27.260)", a su entender demuestra la confusión incurrida ~~por el Iudicante al asimilar los delitos de asociación~~

Fecha de firma: 19/05/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#24640408#327518420#20220519131403960





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 5761/2015/CA7

ilícita fiscal y evasión tributaria, siendo que el primero no requiere para su configuración de la efectiva comisión de delitos tributarios.

Expresó también que de la sola lectura de los considerandos de la resolución apelada se advierte que no se ha efectuado examen alguno de la prueba obrante autos, ni se ha alcanzado el estado de convicción requerido para tal decisorio.

**IV.** Radicados los autos ante esta Alzada, comparecen el Fiscal General, Dr. Carlos María Casas Nóbrega; la querellante AFIP-DGI mediante su representante legal, Dr. Roberto Alejandro Bustos Marún; y por la defensa del imputado Gustavo Alberto Katz, comparecen los abogados Mario Saleme y Manuel De Allende; por la defensa de Leonardo Fabián Petiti y Gabriel Alberto Ludueña, los letrados Ezequiel Mallía y Gabriel Alberto Ludueña; y en representación técnica de Gustavo Brachetta, Gustavo Nicolás Brachetta, Santiago Brachetta, Alberto Rafael Bianchetta, Guillermo Borio y Enrique Rubén Juncos, el Dr. Joaquín Martínez Paz, presentando por escrito los informes de agravios de conformidad al art. 454 del CPPN y al Acuerdo N° 276/2008 de este Tribunal.

En su presentación, además de los argumentos expuestos en el recurso de apelación interpuesto, el **Fiscal General** indicó que analizadas las constancias de autos, y los numerosos elementos probatorios reunidos, sumada a la excesiva e injustificada demora -que aún persiste- sin diligenciarse, y las que por diversas razones no se realizaron o quedaron aún pendientes de producir considera, no obstante esas circunstancias, que existen sobrados motivos para sostener que la instrucción no se encuentra completa, por lo que corresponde continuar la

---

Fecha de firma: 19/05/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#24640408#327518420#20220519131403960

misma a partir de los diversos elementos probatorios reunidos.

En ese sentido, señaló que en los hechos que se les atribuye a los imputados, a partir de las intervenciones telefónicas practicadas, es posible sostener un entramado de conductas coordinadas y complementarias entre los integrantes de la asociación ilícita, para concretar maniobras ilegales de naturaleza financiera con importantes sumas de dinero, actividades concretadas al margen de la financiera que COMPAÑÍA DE INVERSIONES BURSATILES S.A.; transacciones de divisas por sumas importantes; liderados por Gustavo Víctor Brachetta; en las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habrían acontecido las maniobras que fueron minuciosamente descriptas en los hechos del requerimiento fiscal de instrucción.

Además, agregó que el caso de marras presenta una falta total de consideración y ponderación de las intervenciones telefónicas obrantes en autos en las cuales surge claro no sólo el vínculo de los imputados entre sí, que da cuenta de la voluntad común para llevar a cabo un accionar ilícito mancomunado, sino también la estructura de poder en tal asociación, en la cual había instrucciones generales y particulares para llevar a cabo las maniobras ilícitas y hasta para encubrir las de potenciales averiguaciones, como es el caso de los incoados.

Destacó también que idéntico caso ocurre con las operaciones descriptas imputadas bajo el tipo legal de lavado de activos de origen delictivo, donde atento a una valoración parcial de relatos testimoniales propuestos por la defensa y conclusiones arribadas de inspecciones fiscales realizadas a algunos comitentes, determinó que no se ha logrado establecer el origen ilícito de los fondos en

Fecha de firma: 19/05/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#24640408#327518420#20220519131403960



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 5761/2015/CA7

cuestión, pese a haberse llevado adelante la acreditación de una manera irregular conforme la reglamentación vigente al momento (RG N° 692 de la Comisión Nacional de Valores y art. 20, inc. 4 de la ley 25.246), hay numerosas intervenciones telefónicas donde refieren a operatorias por fuera del sistema legal como así tampoco no se hayan emitido los reportes de operación sospechosa a la Unidad de Información Financiera ante tales operaciones.

Por su parte, **la querellante AFIP-DGI** sostuvo que de la lectura del fallo impugnado, surge que el Tribunal ha entendido que el sobreseimiento dictado en favor de los imputados por haberse extinguido la acción penal, lleva consigo que no pueda sostenerse la existencia de una asociación ilícita criminal destinada a cometer delitos.

Respecto a este argumento, refirió que tanto la jurisprudencia como la doctrina sostienen pacíficamente que tanto el delito previsto en el artículo 210 del Código Penal como el dispuesto en el artículo 15 inciso "c" del Régimen Penal Tributario son independientes de los particulares delitos que la asociación tenga por fin cometer.

Alegó también que, la extinción de la acción penal de algunos de los delitos cometidos por distintos miembros de la organización criminosa no resta trascendencia penal a la existencia de una organización integrada por tres o más personas con el propósito de cometer delitos indeterminados.

Expresó además que los delitos de asociación ilícita y de asociación ilícita fiscal son delitos de peligro y de mera actividad, que no requieren para su consumación resultado alguno. Agregó que, por ende, para que se tenga por perfeccionado alguno de esos tipos penales, no es necesario siquiera que se haya tentado la

Fecha de firma: 19/05/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#24640408#327518420#20220519131403960

comisión de alguno de los delitos que constituían el propósito de la banda criminal.

En suma, sobre esta cuestión alegó que, por el contrario la resolución impugnada, desconoce la autonomía de ambos delitos asociativos al sostener que la extinción de la acción penal de los delitos de intermediación financiera no autorizada, omisión de informar operaciones con valores negociables o evasión tributaria, lleva consigo a sostener la inexistencia de los delitos de asociación ilícita y asociación ilícita tributaria.

Por otro lado, expuso que el auto apelado deviene arbitrario en función de una incorrecta valoración del plexo probatorio colectado a lo largo de la instrucción que, a su juicio, permitiría tener por acreditado la existencia de una asociación ilícita con el grado de convicción de *"probabilidad"*.

Asimismo, sostuvo que la resolución impugnada es nula porque carece de toda referencia probatoria que sostenga la decisión adoptada. En esa línea, manifestó que el sobreseimiento de los imputados sólo puede ser resuelto como consecuencia de un verdadero examen crítico y valorativo de toda la prueba que se encuentra legalmente incorporada al expediente y siempre que dicho análisis lleve al Iudicante al estado intelectual de certeza negativa respecto de la verdad de los hechos investigados.

Por último, los abogados defensores de los imputados presentaron sus respectivos informes del art. 454 del CPPN a los cuales se remite por razones de brevedad.

**III.** Conforme lo expuesto y de acuerdo al orden de votación establecido en los presentes obrados, corresponde expedirse en primer término al señor Juez de Cámara doctor Eduardo Ávalos, en segundo lugar, a la señora Juez de





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 5761/2015/CA7

Cámara doctora Graciela Montesi y, por último, al señor Juez de Cámara doctor Ignacio María Vélez Funes.

**El señor Juez de Cámara Dr. Eduardo Ávalos dijo:**

Llegan los presentes autos a estudio del Tribunal en virtud de los recursos de apelación deducidos por el Fiscal General y la querellante AFIP-DGI, en contra de la resolución dictada por el señor Juez Federal N° 3 de Córdoba, con fecha 9 de noviembre de 2020 por medio de la cual dispuso el sobreseimiento de los imputados Gustavo Víctor Brachetta, Gustavo Nicolás Brachetta, Santiago Brachetta, Alberto Rafael Bianchetta, Guillermo Borio y Enrique Juncos en orden a los hechos **segundo, tercero, cuarto, quinto, séptimo y noveno** - vinculados con el delito de lavado de activos del art. 303 punto 1 y 2 inc. a) del CP-, **primero y sexto** -relacionados con las figuras penales de asociación ilícita del art. 210 del CP y asociación ilícita fiscal del art. 15 inc. c) del régimen penal tributario previsto por el art. 279 de la Ley 27.430- todo ello en función de lo dispuesto por el art. 336, inc. 3 del CPPN.

En función de los planteos y agravios expuestos por los recurrentes, la cuestión a decidir en autos se circunscribe a determinar si el sobreseimiento dictado por el juez de la causa debe ser convalidado por concurrencia de los requisitos necesarios para cerrar definitivamente el proceso en los términos del art. 335 del CPPN, o si, por el contrario, debe ser revocado por prematuro y ausencia de certeza negativa.

Sin embargo, como cuestión previa y por razones de orden metodológico, en primer lugar me expediré acerca de la solicitud de declaración de nulidad por fundamentación aparente conf. art. 123 del CPPN efectuada por la

---

Fecha de firma: 19/05/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#24640408#327518420#20220519131403960

querellante AFIP-DGI, para luego abordar las situaciones procesales de los imputados.

## **I. Nulidad por fundamentación aparente**

La regla general en materia de nulidades en el procedimiento penal resulta de lo estipulado por **el art. 166 del CPPN**, en cuando dispone: *"Los actos procesales serán nulos sólo cuando no se hubiera observado las disposiciones expresamente prescriptas bajo pena de nulidad"*.

Esta sanción procesal implica una grave decisión toda vez que elimina un acto del proceso por estar viciado de una irregularidad manifiesta e insalvable, razón por la cual, el Código Procesal Penal de la Nación impone un criterio restrictivo de interpretación al respecto.

Sobre esta noción conceptual reposa el sistema nulificante del proceso penal, desde que no se admite la nulidad por la nulidad misma, pues si el acto procesal pese a su irregularidad no afecta el derecho de defensa, es evidente que no hay interés normativamente protegido que justifique tal declaración, de acuerdo a lo previsto por el art. 169 del CPPN.

De ese modo, es el interés o derecho lesionado, el perjuicio o daño, la medida con la que debe ponderarse la posible nulidad del acto procesal, y ello debe estar demostrado y verificado acabadamente en el caso concreto, por el significado que implica la tacha final de nulidad.

En esta tesitura, las nulidades absolutas quedan reservadas exclusivamente a la violación de normas constitucionales, o cuando la ley así lo establezca expresamente.

Por su parte, **el art. 123 del CPPN** establece que *"Las sentencias y autos deberán ser motivados, bajo pena*

*Fecha de firma: 19/05/2022*

*Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA*

*Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA*

*Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA*

*Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA*



#24640408#327518420#20220519131403960



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 5761/2015/CA7

*de nulidad. Los decretos deberán serlo, bajo la misma sanción, cuando la ley lo disponga".*

Si bien la Constitución Nacional no ha impuesto de modo explícito el requisito de motivar las sentencias, el art. 18 establece que *"Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso"*, lo que debe entenderse, en dicho aspecto, en combinación con el carácter republicano de gobierno.

El sistema republicano de gobierno impone, entre otros aspectos, la necesidad de asegurar la publicidad de las decisiones judiciales en tanto ello permite el control de que las mismas -como condición de validez- *"sean conclusión razonada del derecho vigente, con particular referencia a las circunstancias comprobadas de la causa"* (C.S.J.N. Fallos 238:550; 244:521; 249:275 entre otros).

Resultado de ello se presenta entonces la exigencia de fundamentación de las decisiones judiciales, respondiendo en definitiva a la necesidad de que el proceso penal sea una herramienta o instrumento idóneo para alcanzar la efectiva y real tutela por parte del Estado sobre los intereses en conflicto.

Es decir que esta solución procesal encuentra fundamento en el derecho de defensa en juicio y del debido proceso legal toda vez que, nadie puede defenderse de aquello que no conoce (art. 18 de la CN y Tratados Internacionales con jerarquía constitucional).

Respecto del deber de motivación de las sentencias vale recordar que la CSJN tiene dicho que: *"La exigencia de que los fallos judiciales tengan fundamentos serios reconoce raíz constitucional y tiene, como contenido concreto, el imperativo de que la decisión se conforme a la ley y a los principios propios de la*

Fecha de firma: 19/05/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#24640408#327518420#20220519131403960

*doctrina y de la jurisprudencia vinculados con la especie a decidir."* (Fallos 321:2375, "Corach, Carlos Wladimiro c/ Verbitsky, Horacio"; 27.08.1998)

En síntesis, la exigencia de fundamentación de las sentencias implica que las decisiones judiciales deben expresar las cuestiones de hecho y de derecho sobre la base de las probanzas incorporadas en la causa que resulten conducentes para la solución del caso.

Trasladados tales exigencias legales y conceptos normativos al caso de autos y, concretamente, en orden a los agravios formulados por la querellante AFIP-DGI, considero que la resolución dictada por el Juez Federal de la causa contiene los elementos mínimos y necesarios para calificarla de acto jurisdiccional válido en orden a la nulidad alegada por falta de fundamentación en los términos del art. 123 del CPPN.

Más allá de que no comparto la solución adoptada por el magistrado interviniente -como luego se verá- lo cierto es que de los fundamentos expuestos no se advierte **vicio de entidad suficiente** que amerite declarar la nulidad solicitada en función de lo dispuesto por el art. 123 del CPNN.

En efecto, aunque el Juez de la causa ha tomado como relevantes algunas cuestiones que en rigor, carecen de verdadera significación jurídico penal en detrimento de otras que si deben ser ponderados para la configuración de los hechos aquí investigados, tales extremos no se presentan como susceptibles de justificar una declaración de nulidad en los términos del art. 123 CPPN.

Asimismo, tampoco se vislumbra que el pronunciamiento apelado contenga una redacción deficiente en la exposición de los hechos ni falta de fundamentación







## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 5761/2015/CA7

en la decisión o motivación aparente que se encuentre en oposición a lo prescripto por la norma de rito.

Por lo tanto, cabe concluir que el pronunciamiento emitido por el Juez Federal N° 3 de Córdoba no carece de fundamentación suficiente en los términos del art. 123 del CPPN, debiendo rechazarse los argumentos de la querellante AFIP-DGI dirigidos en tal sentido, aun cuando el suscripto no comparta la solución adoptada respecto del análisis de alguno de los hechos objeto de investigación en autos.

### II. Situación procesal de los imputados

En orden a los hechos que se atribuyen en autos a los encartados Gustavo Víctor Brachetta, Gustavo Nicolás Brachetta, Santiago Alberto Brachetta, Alberto Rafael Bianchetta, Guillermo Luis Borio y Enrique Rubén Juncos y atento la naturaleza y fundamentos del decisorio puesto en crisis teniendo presente, además, los agravios y argumentos expuestos por los recurrentes, resulta necesaria efectuar una breve enunciación previa del marco normativo referido a la procedencia del dictado del sobreseimiento.

En lo aquí concierne, el texto legal del art. 335 del CPPN prescribe que el sobreseimiento es la decisión jurisdiccional por medio de la cual se *"...cierra definitiva e irrevocablemente el proceso con relación al imputado a cuyo favor se dicta"*. Consecuentemente, el dictado del sobreseimiento hace cosa juzgada material en cuanto a la imputación enervada en contra de una persona, en orden a ese hecho concreto en cuestión de forma tal que en virtud del principio *non bis in ídem* y garantiza el derecho a que no se avance en una doble persecución penal.

Además, el sobreseimiento exige certeza negativa en cuanto hace a las causales taxativamente previstas por el artículo 336 del CPPN.

Fecha de firma: 19/05/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#24640408#327518420#20220519131403960

Contrariamente, tal pronunciamiento no debe dictarse si existen indicios para sospechar la intervención de los involucrados, en tanto que solo será en la etapa de juicio donde es requerida la certeza positiva sobre la existencia del hecho y su responsabilidad penal.■

Al respecto se ha dicho que *"...la conclusión anticipada de la investigación en virtud de las hipótesis previstas en el artículo 336 del Código Procesal Penal de la Nación debe basarse en prueba inequívoca que despeje toda posibilidad de duda, en cuanto ese supuesto es incompatible con dicha norma."* (CNCP Sala I, 8802 "Grimaldi, Héctor Fabián y otros s/recurso de casación" Reg. 12.287, rta. 14/8/08).

De ello se sigue que pesa sobre los Tribunales la obligación clara y evidente de merituar y valorar si las probanzas obtenidas por la instrucción hasta el momento en cuestión, permiten arribar a un grado de certeza negativa, en cuanto a los extremos objetivos y subjetivos de la imputación.

Ello es así, habida cuenta de que dicho estado intelectual conlleva la desvinculación del encartado respecto del proceso penal. No debe olvidarse que el sobreseimiento interrumpe en forma definitiva el normal desarrollo del proceso penal a la sentencia, cerrando definitivamente el juicio, circunstancia que luego no podrá modificarse, particularidad, que amerita la profundización de la investigación al extremo posible.■

Se tiene reiteradamente dicho que por su carácter de sentencia definitiva el sobreseimiento requiere la comprobación de una certeza negativa que no puede sustentarse en dudas.

Al respecto, cabe recordar que *"el sobreseimiento exige un estado de certeza sobre la existencia de la*

Fecha de firma: 19/03/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#24640408#327518420#20220519131403960



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 5761/2015/CA7

*causal en que se fundamenta. Procede cuando el tribunal no le quede duda acerca de la extinción de la pretensión penal, de la falta de responsabilidad del imputado o de que debe ser exento de pena"* (CLARIA OLMEDO, Jorge, Derecho Procesal Penal, Tomo III, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2001, p. 16).

Por su parte, nuestro Máximo Tribunal tiene dicho que **la necesidad de certeza negativa para sobreseer a una persona con respecto a determinado hecho resulta un mandato procesal esencial** (CSJN Fallos: 335:1876).

Teniendo en cuenta los lineamientos conceptuales esbozados precedentemente, tras analizar los agravios de los recurrentes a la luz de las constancias de la causa, anticipo que asiste razón al representante del Ministerio Público Fiscal y la AFIP-DGI en el sentido de que el sobreseimiento dictado por el Juez interviniente resulta prematuro.

En autos se advierte, por un lado, que la etapa de instrucción no se encuentra completa ni concluida y por el otro, que del examen de los elementos colectados hasta aquí se verifica la falta de certeza negativa necesaria para desvincular a los encartados del proceso. Doy Razones.

### **III. De falta de configuración de la certeza negativa necesaria para sobreseer a los imputados en autos**

Dado que el sobreseimiento requiere -como presupuesto de procedibilidad- la configuración de un estado de certeza negativa en cuanto a las causales taxativamente previstas por el artículo 336 del CPPN conforme ya fue expuesto previamente, del examen de los elementos probatorios colectados en la presente causa no se advierte el cumplimiento de tales extremos.

---

Fecha de firma: 19/05/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#24640408#327518420#20220519131403960

Contrariamente a lo sentado por el Juez de la causa, estimo que existen numerosos elementos de convicción reunidos en el proceso de los que no puede derivarse sin más que los hechos investigados no encuadran en las figuras penales de lavado de activos, de asociación ilícita y de asociación ilícita fiscal.

A los fines expositivos, en primer lugar se expondrán las razones que fundamentan la falta de certeza negativa necesaria para desvincular a los encartados del proceso respecto de los hechos relacionados con el delito de lavado de activos; y luego, los vinculados con los ilícitos de asociación ilícita (art. del CP) y de asociación ilícita fiscal (art. 15, inc. c) del régimen penal tributario previsto por el art. 279 de la Ley 27.430.

#### **1) Hechos relacionados con el delito de lavado de activos**

Dado que en los presentes autos se investigan presuntas maniobras relacionadas con el delito de lavado de activos que se habrían desarrollado en el seno de una empresa dedicada a la comercialización de títulos valores en carácter de Agente de Bolsa, ante todo cabe efectuar las siguientes precisiones conceptuales acerca de los requisitos de configuración del tipo penal de lavado de activos previsto por el art. 303 del CP, de la importancia de la prueba indiciaria en esta clase de delitos y de la relevancia jurídico penal del cumplimiento de las normas administrativas como mecanismo de prevención del lavado de activos dentro del mercado de capitales.

##### **a. Precisiones conceptuales previas respecto del delito de lavado de activos**

Respecto de la configuración del tipo penal de lavado de activos cabe recordar que el delito previsto por el art. 303 del CP encuentra previsión normativa dentro del

Fecha de firma: 19/05/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#24640408#327518420#20220519131403960



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 5761/2015/CA7

Título XIII, junto con aquellos delitos que afectan el orden económico y financiero, conforme al texto incorporado por el art. 4º de la Ley Nº 26.683 (B.O. 21/06/2011).

Así, en cuanto aquí interesa resaltar, la norma penal del art. 303, inc. 1) del CP dispone: *"1) Será reprimido con prisión de tres (3) a diez (10) años y multa de dos (2) a diez (10) veces del monto de la operación, el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito, y siempre que su valor supere la suma de pesos trescientos mil (\$ 300.000), sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí"* (el resaltado es mío).

Atendiendo a la tipificación legal de la norma citada y en orden a los requisitos de configuración del delito de lavado de activos del art. 303 del CP - resulta fundamental verificar en el caso concreto la concurrencia de alguna de las conductas allí tipificadas.

Por lo general, este tipo de conductas involucran maniobras complejas, todas ellas tendientes a hacer desaparecer las huellas o rastros del dinero obtenido en forma ilícita por ser producto del delito. Ello ha llevado a la doctrina, en forma mayoritaria, a reconocer la existencia de al menos tres etapas en el proceso de "lavado" de activos de origen ilícito. Una inicial o de "colocación"; luego la etapa de "estratificación" -donde se evidencian el mayor número de transacciones para disipar el rastro del dinero obtenido en forma ilegal; y, finalmente la "integración" que es el momento en que pueden disponerse ~~los fondos dentro de un marco económico de apariencia~~

Fecha de firma: 19/05/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#24640408#327518420#20220519131403960

legítima, tal como sostuve en previamente en autos "LEGAJO DE APELACION: ANDRADA, ADRIAN POR INFRACCIÓN LEY 23.737" (Expte.: FCB 7125/2016/25/CA8)", Resolución del 20 de julio de 2020.

En orden a la verificación del origen ilícito de los bienes objeto de las maniobras de lavado de activos, debe atenderse que el hecho antecedente, solo puede ser un ilícito.

Precisamente, además de vincular el orden económico y financiero como bien jurídico a dicha figura penal, uno de los ejes de la sustitución del texto legal dispuesta por Ley 26.683 fue la caracterización del origen de los bienes al supeditarlos como provenientes de un ilícito penal y no de un delito.

En este punto, viene al caso el comentario de Fernando Córdoba cuando, a propósito de dicha cuestión, sostuvo que *"ya entonces eran aplicables para la interpretación del contenido y alcance de ese elemento las consideraciones elaboradas por la doctrina y la jurisprudencia para el encubrimiento"*, por ello continua el autor diciendo que, *"la mención a lo delictivo tiene únicamente el sentido de que solo un hecho ilícito penal puede ser hecho antecedente, es decir, no una contravención, una infracción administrativa o fiscal etc."* (Córdoba, Fernando J., Delito de lavado de dinero, Ed. Hammurabi, Buenos Aires año 2017, Pág. 136).

Por otra parte, el tipo penal en trato refiere a la relación de causalidad que debe existir entre la obtención del bien y el ilícito precedente, que debe haber sido su causa, para lo cual resulta suficiente determinar su vinculación con las conductas delictivas en cuestión, sin que sea posible concluir otro tipo de origen.





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 5761/2015/CA7

Entonces, para que una conducta previa constituya ilícito precedente del lavado de activos, basta con que la misma sea **típica y antijurídica**.

Sin embargo, basta con que ese hecho del cual provienen los bienes, sea solo un hecho ilícito, es decir, típico y antijurídico.

A lo dicho, cabe agregar que el ilícito penal precedente debe hallarse objetivamente vinculado con delitos susceptibles de generar ganancias atento el carácter esencialmente económico del lavado de activos.

En esa línea, se ha expresado que hecho antecedente de lavado de dinero solo puede ser un delito. Pero no hace falta que el hecho anterior del cual provienen los bienes haya sido un hecho culpable y punible, sino que basta que haya sido típico y antijurídico, es decir un hecho ilícito (Córdoba, Fernando J. Ob. Cit. Pág. 137).

El autor citado también señala que de *"acuerdo con las reglas de la accesoriedad limitada, integran el hecho ilícito precedente no sólo el comportamiento del autor, sino también el comportamiento por medio del cual cómplice e instigador participan en el ilícito del autor. Con otras palabras, delito no es solo el delito cometido a título de autor, sino también a título de participación"*.

### **b. La importancia de la prueba indiciaria en el delito de lavado de activos**

Al respecto, debe tenerse presente, con alcance liminar, que nuestro ordenamiento jurídico prevé que en la valoración de la prueba deben seguirse las pautas establecidas por el sistema de la sana crítica racional, conforme a lo previsto por el artículo 398 del CPPN.

Es decir, consiste en que la ley no impone normas generales para acreditar algunos hechos delictuosos, ni ~~determina abstractamente el valor de las pruebas~~, sino que

Fecha de firma: 19/05/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#24640408#327518420#20220519131403960

deja al juzgador en libertad para admitir toda prueba que estime útil al esclarecimiento de la verdad.

No obstante ello, la ausencia de reglas condicionantes de la convicción no significa, carencia absoluta de reglas.

El sistema de la sana crítica exige la fundamentación de la decisión, de conformidad con las reglas de la lógica, de los conocimientos científicos y de las máximas de la experiencia.

En ese marco, debe atenderse a las dificultades que por lo común presenta la investigación y comprobación tanto de las maniobras que involucran al delito de lavado de activos como a la complejidad que atañe al origen ilícito de los fondos.

Así lo ha expresado la CSJN cuando sostuvo que el objeto del proceso penal es el descubrimiento de la verdad y que, para tal fin, nuestro ordenamiento vigente consagra, por un lado, el principio de libertad probatoria y, por el otro, el de la sana crítica racional. Por el primero, los hechos pueden ser probados por cualquier medio de prueba constitucionalmente válido. Por el segundo, la apreciación de los documentos, de los testimonios y de los indicios no está previamente tarifada por el legislador con reglas automáticas, sino que es dejada libremente a los jueces, cuyas conclusiones deberán ser el fruto razonado de esas pruebas y merced al empleo y con fundamento en los principios de la lógica, de las ciencias auxiliares, de la experiencia, y del sentido común. (Fallos 326:1163; 321:2990, entre otros).

En ese contexto, se habrá de otorgar suma preeminencia a la utilización de la prueba indiciaria, para la cual, tanto la doctrina y jurisprudencia destacadas en







## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 5761/2015/CA7

la materia han fijado los estándares probatorios mínimos para la acreditación de los extremos señalados.

Resultan ilustrativas las consideraciones vertidas acerca de que *"la prueba de indicios sea especialmente idónea y útil para suplir las carencias de la prueba directa en los procesos penales relativos a estas y otras actividades delictivas encuadradas en lo que se conoce como criminalidad y evitar así parcelas de impunidad que podrían generarse en otro caso respecto a los integrantes de estas organizaciones delictivas. En la práctica procesal penal será habitual que no exista prueba directa de estas circunstancias y al faltar ésta deberá ser inferida de los datos externos y objetivos acreditados (prueba de presunciones o pruebas de indicios"* (Zaragoza Aguado, Javier Albert *"El blanqueo de bienes de origen criminal", en Combate al lavado de dinero en los sistemas judiciales"* CIDAC/ OEA SEDRONAR N°1, año 2002, pág. 26).

Del mismo modo, comparto el razonamiento expuesto respecto de que *"...la utilización de indicios, que se justifican en nuestro ordenamiento procesal por imperio de los principios de libertad probatoria y de la sana crítica racional, se presenta como instrumento válido para acreditar extremos de la imputación delictiva, aunque sean apreciaciones provisionales. Dicha circunstancia ha sido puesta de resalto en la doctrina europea, en la que se subrayó que la prueba de indicios es especialmente idónea y útil para suplir las carencias de evidencia directa en los procesos penales relativos a estas y otras actividades delictivas encuadradas en lo que se conoce como criminalidad organizada, y evitar así las parcelas de impunidad que podrían generarse en su defecto"* (Blanco, Hernán, *Técnicas de Investigación del Lavado de Activos, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2013, pág. 119*).

Fecha de firma: 19/05/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#24640408#327518420#20220519131403960

Para una adecuada y completa delimitación teórica de la cuestión vale traer a colación los fundamentos expuestos por diversos tribunales del país acerca del **carácter indiciario que cabe otorgar al concepto de ilícito previo** para la configuración del delito de lavado de activos.

Así lo ha entendido la Cámara Nacional de Casación Penal al decir que la determinación del origen delictivo de los bienes que son objeto de la imputación se trata de una cuestión extraordinariamente relevante *"...porque su demostración -mediante prueba indiciaria- del delito básico permite deducir la ejecución del "hecho consecuencia" -lavado de activos- en tanto exista un enlace preciso y directo entre aquél y éste"*. (CNCP, Sala I, Resolución del 26.7.2006, en autos **"Orentrajch, Pedro y otro"**).

También viene al caso citar los argumentos expuestos por dicho tribunal cuando afirmó que *"...para la reconstrucción material de los hechos propios del delito de blanqueo de capitales, resulta lícito recurrir a la prueba de indicios y que la determinación de la existencia del hecho puede válidamente utilizarse -como indicios salientes y de particularidad significación probatoria- la comprobación que los acusados registran movimientos patrimoniales injustificados, que carecen de actividad comercial o profesional lícita que justifique o sustente tal giro patrimonial y que poseen vínculos o conexiones con actividades ilícitas o con personas o grupos que lleven a cabo tales actividades"*(CFCP, Sala III, Resolución del 11.11.2014, en autos **"Sánchez Pedro Norberto y otro s/ Recurso de casación"**).

En tal sentido, debe señalarse que *"alcanza con presumir la ilicitud de los fondos sobre la base de*

Fecha de firma: 19/05/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#24640408#327518420#20220519131403960



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 5761/2015/CA7

*indicios para poder tener por constituido el injusto penal, sin necesidad de un ahondamiento exhaustivo y al detalle sobre la actividad delictiva previa generadora de la ganancia (JCCF N°7, Resolución del 25.8.2017 en autos "Báez, Lázaro Antonio y otros s/encubrimiento y otros").*

En función de los conceptos vertidos, debe tenerse en cuenta que en casos como el presente donde se analizan complejas maniobras de criminalidad económica, la prueba de presunciones e indicios es de decisiva relevancia como elemento de convicción, en tanto resulta admisible y útil para el esclarecimiento y reconstrucción histórica de los hechos.

Máxime cuando los sucesos que constituyen el núcleo material de las imputaciones son ideadas, planificadas y perpetradas bajo esquemas de organización estructurados con sofisticación por una pluralidad de sujetos que cuentan con profesionalismo, y poseen un saber en los menesteres necesariamente involucrados y que en la faena criminal exceden a los de un profano o lego, como ser las supuestas maniobras de lavado de activos dentro del mercado bursátil que se investigan en autos.

### **c. De la relevancia jurídico penal del cumplimiento del sistema de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo dentro del mercado de capitales**

Debido a la complejidad que encierra la investigación y persecución del fenómeno del lavado de activos en nuestro país, dentro del marco de los procesos penales como el de autos debe otorgarse máxima importancia al cumplimiento del **sistema de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo (PLA/FT)** tanto al sector financiero, como bursátil.

Por ello, cabe recordar que el sistema financiero

~~comprende la suma del sistema bancario propiamente dicho~~

Fecha de firma: 19/05/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#24640408#327518420#20220519131403960

con el mercado de capitales. Ambos conforman el sistema financiero en sentido amplio. La integralidad del sistema financiero implica tener en cuenta la estrecha vinculación entre el mercado de capitales y el sistema bancario.

Ahora bien, el **"mercado de capitales"** ha sido definido en Argentina por la propia Ley 26.831 de Mercado de Capitales, cuando expresa que será el ámbito donde se ofrecen públicamente valores negociables u otros instrumentos previamente autorizados para que, a través de la negociación por agentes habilitados, el público realice actos jurídicos, todo ello bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Valores.

Siguiendo las conceptualizaciones vertidas por D'Attellis, puede decirse que entre las **principales características** del mercado de capitales *"se destacan las siguientes: **Información.** Un atributo fundamental de un buen mercado es la disponibilidad de información en el mismo. **Un mercado debe ser transparente.** Ideal: evitar el problema de información asimétrica. **Liquidez.** Se refiere a la posibilidad de comprar o vender rápidamente un activo, a un precio transparente. **Costos de transacción.** Un mercado es más eficiente cuanto menores son sus costos de transacción"* (D'ATTELLIS, AGUSTÍN. Introducción al mercado de capitales en la Argentina. - Ed. Moreno Universidad Nacional de Moreno, 2014. (Biblioteca de Economía) ISBN 978-987-45575-0-6 1. Pág. 36; el destacado es propio).

El mercado de capitales en Argentina se rige por las disposiciones de la ley mencionada -junto con las demás normas legales concordantes- y su actividad se encuentra bajo la órbita de la Comisión Nacional de Valores. Dicha entidad autárquica, actúa como única autoridad de aplicación en la supervisión, regulación, inspección, ~~fiscalización y sanción de todas las personas físicas y~~

Fecha de firma: 19/05/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#24640408#327518420#20220519131403960



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 5761/2015/CA7

jurídicas, que, por cualquier causa o motivo o circunstancia, desarrollen actividades relacionadas con la oferta pública de valores negociables, otros instrumentos, operaciones y actividades contempladas en la nueva Ley de Mercado de Capitales N° 26 831, su Decreto Reglamentario N° 1023/2013 y sus normas complementarias.

Este organismo vela por la transparencia de las operaciones para generar las condiciones necesarias para que el mercado de capitales se perfile como motorizador del empleo y la inversión en la Argentina, para lo cual cuenta con las atribuciones de autorizar, suspender o cancelar la oferta pública de acciones; recibir denuncias y reclamos de cualquier participante del mercado de capitales; aprobar los términos y condiciones de los contratos de Futuros y Opciones, entre otras.

Ahora bien, dentro del sistema financiero de nuestro país sabido es que existen los servicios financieros *off shore* -también llamadas "cuevas de dinero"- que operan como importantes actores para la fuga de capitales y para el blanqueo de activos de origen ilícito.

Para dimensionar este fenómeno criminal, citando a Bercovich y Rebossio, se ha indicado que *"pueden ser simplemente oficinas clandestinas, o bien revestir la forma jurídica de casas de cambio, **sociedades de bolsa**, compañías financieras, cooperativas financieras y hasta agencias de viaje"* (Rúa, Magdalena. El rol de los servicios profesionales en la fuga de capitales y la evasión fiscal. 48 Jornadas internacionales de finanzas públicas - facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba del 16 y 18 de septiembre de 2015, el destacado es mío).

Acerca de este fenómeno delictivo, con razón ~~también se ha dicho que la~~ *"...realidad criminológica*

Fecha de firma: 19/05/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#24640408#327518420#20220519131403960

organizada que utiliza el sistema económico y financiero legal para reciclar las ganancias del dinero ilícitamente obtenido, venía demandado la regulación penal de conductas que van mucho más allá de la afectación a la administración pública. La actividad de reciclar el dinero ya dejó de ser el problema de un país o de un Estado en particular, pues sus consecuencias se verifican transnacionalmente. Las organizaciones delictivas que los generan hacen sentir el efecto de su accionar convirtiendo a numerosas economías, especialmente las emergentes, en cada vez más dependientes de esos capitales ilícitos, en tanto que las más desarrolladas llegan incluso a **ver conmovidos diversos sectores, como por ejemplo, el financiero**. La globalización de la economía también ha reproducido la globalización de las actitudes delictivas" (Gonella, Carlos; Luciani, Diego. El delito de lavado de activos y la garantía constitucional del *ne bis in idem*. Revista Derecho Penal. Año II, N° 4. Ediciones Infojus. Pág. 229/230, el destacado es propio).

Desde el año 2000 nuestro país es miembro pleno del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), cuya misión es la de fijar los estándares internacionales para la efectiva implementación de políticas, medidas legales, regulatorias y operativas **para prevenir y combatir el Lavado de Activos**, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

A través de sus "40 Recomendaciones", se han instituido las políticas primarias para prevenir el lavado; se busca su implementación dentro de los territorios de los países miembros, en consonancia con la legislación local vigente para disminuir el peligro de lavado de dinero en **sus sistemas financieros**.

Fecha de firma: 19/05/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#24640408#327518420#20220519131403960



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 5761/2015/CA7

Sin embargo, es a partir de la sanción de la Ley 26.683, que se cristalizó la orientación del sistema antilavado hacia una política criminal en tres dimensiones. Una **preventiva**, mediante la implementación de las herramientas necesarias para la identificación de maniobras, sociedades, estructuras de negocios sospechosos, generando la información financiera necesaria, tanto a los fines de la persecución como de la prevención global de la criminalidad asociada a las finanzas. Otra **persecutoria**, destinada a mejorar e introducir nuevas herramientas de persecución penal de los casos sometidos a la justicia de criminal. Por último, la dimensión **punitiva** orientada a fortalecer el abanico de conductas punibles mediante la incorporación de nuevos delitos.

En cuanto aquí interesa, dentro de la dimensión preventiva del lavado de activos adquieren relevancia para la causa los cambios normativos que involucran la limitación del uso del dinero en efectivo y los deberes de intercambio de información para los sujetos obligados.

En efecto, la limitación legal del uso del dinero en efectivo por parte de la Ley 25.345 se sancionó con el fin de combatir la evasión tributaria y previsional, **pero también propende a prevenir el lavado de activos de origen delictivo**.

Del mensaje de elevación del proyecto de ley, se advierte que las restricciones al manejo del dinero en efectivo -alentando la utilización de instrumentos bancarizados como medio de pagos- contribuiría también limitar las posibilidades del lavado de dinero.

Iguales consideraciones surgen de los debates parlamentarios previos a la sanción de la llamada ley antiveasión. Allí, además de exponerse la necesidad de ~~imponer límites a las transacciones en~~ dinero en efectivo,

Fecha de firma: 19/05/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#24640408#327518420#20220519131403960

se hizo referencia a la necesidad de promover, otros medios de pago como ser depósitos en cuentas bancarias, giros o transferencias de la misma índole, cheques, tarjetas de créditos y otros procedimientos cuya autorización podrá efectuar el Poder Ejecutivo. Es decir, el legislador procuró impedir los pagos en dinero en efectivo admitiendo en su lugar, como medios válidos, a los pagos materializados a través de depósitos en cuentas bancarias, transferencias, giros, cheques, tarjetas, entre otros, a fin de mitigar la evasión fiscal, **el lavado de dinero** y alentar la bancarización de las operaciones.

Antes de ello, vale recordar que, previamente se había sancionado la Ley 25.246 que incorporó la figura de lavado de activos dentro del Código Penal como figura autónoma. En esa oportunidad, también se creó la Unidad de Información Financiera (UIF) como entidad autárquica encargada del análisis, tratamiento y transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el delito de lavado de activos y se designa a los sujetos obligados a informar a dicho organismo la existencia de alguna actividad sospechosa que deba ser analizada.

El deber de informar es la obligación legal que tienen los sujetos enumerados en el artículo 20, para que dentro del ámbito de su actuación se ponga a disposición de la Unidad de Información Financiera (UIF) la documentación recabada de sus clientes y de llevar a conocimiento de la Unidad de Información Financiera (UIF), las conductas o actividades de las personas humanas o jurídicas, a través de las cuales pudiere inferirse la existencia de una situación atípica que fuera susceptible de configurar un hecho u operación sospechosa, ya sea de lavado de activos o financiación de terrorismo.

---

Fecha de firma: 19/05/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#24640408#327518420#20220519131403960





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 5761/2015/CA7

El agente bursátil está obligado, de considerar que existe una operación sospechosa, a solicitar al cliente inversor que brinde detalles de su operatoria, que justifique la procedencia de los fondos depositados o cualquier otra información que estime pertinente.

Paralelamente, dado el importante volumen de flujos financieros que se canalizan dentro del mercado de capitales, desde el año 2010 en adelante la CNV, en forma conjunta con la UIF, dictó una serie de resoluciones de especial importancia a los fines de la **prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo (PLA/FT)**.

Primero, la **Resolución General N° 580/2010 de la CNV**, que estableció que los agentes del mercado de capitales **sólo pueden efectuar y recibir pagos superiores a pesos un mil (\$ 1000) con cheques o algún otro medio**, salvo dinero en efectivo, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 25.345 de Prevención de la Evasión Fiscal.

Luego dictó la **Resolución General N° 583/2010 de la CNV** que profundizó aún más la regulación y control del mercado de capitales en ocasión del uso de efectivo monetario, exigiendo en esta ocasión que los operadores del mercado de capitales reciban pagos en cheque siempre que éstos estén endosados de modo completo y cuenten con procedimientos de control previamente aprobados por la comisión, en consonancia con las previsiones de las leyes 25.246 y 25.345.

Al respecto de ha indicado que *"estas dos normativas han sido de especial importancia porque mejoraron el control de uso de medios de dinero en efectivo y porque facilitaron la identificación de clientes, aportando así mayor transparencia y claridad a todo el mercado de capitales y el público inversor. Este ~~proceso de adecuación normativa se profundizó durante el~~*

Fecha de firma: 19/05/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#24640408#327518420#20220519131403960

año 2011, dado que las disposiciones del nuevo régimen legal en materia de sujetos obligados, reporte de operaciones y políticas de prevención dio lugar a una adecuación paulatina de las normas correspondientes para todo el sector (VANOLI, Alejandro. El rol de la CNV en la prevención y persecución del lavado de activos a través del mercado de capitales en "Lavado de activos. Prevención y sanción" Coordinadores: Diego Sarrabayrouse, Martín Gerardo Degoumois. Ed. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, año 2012, Pág. 121, el resaltado es mío).

En esa misma línea, también se dictó la **Resolución N° 33/2011 de la UIF** mediante la que se establecieron las medidas y procedimientos necesarios para **prevenir, detectar y reportar los hechos**, actos operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos **de lavado de activos** y financiación del terrorismo para los agentes de bolsa como COMPAÑÍA DE INVERSIONES BURSÁTILES S.A.

Por su parte, en consonancia con las previsiones legales la Ley 25.246, la **Resolución 50/2011 de la UIF** se aprobó el sistema de registración de sujetos obligados en el "Sistema de Reporte de Operaciones –Manual del Usuario– I. Registración". A tal fin, los sujetos obligados enumerados en el artículo 20 de la Ley N° 25.246 -entre ellos los Agentes de Bolsa- y los oficiales de cumplimiento deberán registrarse en la página de la UIF y presentar la documentación respaldatoria de su inscripción en el Sistema de Reporte de Operaciones dentro de los quince (15) días hábiles administrativos posteriores a su registración en la página web de dicho organismo prevista al efecto.

Finalmente, la CNV -en forma conjunta con los equipos de la UIF-, dictó las **Resolución N° 229/2011 de la UIF** que modificó la Resolución N° 33/2011 (modificatoria de ~~la Resolución N° 152) y la Resolución UIF 140/2012.~~

Fecha de firma: 19/05/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#24640408#327518420#20220519131403960



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 5761/2015/CA7

Asimismo, introdujo cambios respecto de las políticas de regulación respecto de los *Compliance Officer* -oficiales de cumplimiento- para el sector, incorporó disposiciones específicas sobre políticas de identificación de clientes que actúen a través de sociedades off shore, fondos de inversión colectiva, patrimonios de afectación específica y otros instrumentos financieros **considerados de mayor riesgo a los fines prevenir el lavado de activos.**

Por disposición de la Resolución n° 229/2011 (13/12/2011) de la Unidad de Información Financiera (UIF), por Ley 25.246 (B.O. 5/05/2000), (art. 20., Código Penal) y Normas CNV 2013- Título XI, Sección 1, Art. 1º, los agentes bursátiles y demás intermediarios que actúen en el mercado de capitales deberán confeccionar un Legajo de cada cliente y monitorear todas sus transacciones, reportando a la UIF aquellas operaciones inusuales o que, de acuerdo con el perfil del cliente, despierten sospechas.

Estos reportes son conocidos como Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) y, en el caso de sospechas de lavado de activos, deben ser remitidos a la UIF en un plazo máximo de 150 días corridos; mientras que, en el caso de sospechas de financiación del terrorismo, el plazo baja a sólo 48 horas.

La Resolución UIF 229/2011, también establece que los clientes deberán ser clasificados, en función del tipo y monto de sus operaciones, de la siguiente forma: 1) Habituales: aquellos clientes que en el año realizan operaciones por \$ 60.000 o más; 2) Ocasionales: aquellos cuyas operaciones anuales no superan los \$ 60.000 3) Inactivos: aquellos cuyas cuentas no hubiesen tenido movimiento por un lapso superior al año calendario y la valuación de los activos de éstas sea inferior a los **\$60.000.**

Fecha de firma: 19/05/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#24640408#327518420#20220519131403960

Mediante la segunda resolución, esto es la **Resolución 140/2012 de la UIF** se incorporaron normas regulatorias para las personas físicas o jurídicas que cumplan funciones de administración de carteras fiduciarias o sean agentes fiduciarios, intermediarios o comercializadores de este tipo de valores negociables.

**2) Concretos, graves y concordantes indicadores de riesgo de lavado de activos de origen delictivo por parte de COMPAÑÍA DE INVERSIONES BURSÁTILES S.A.**

Vinculando el universo normativo efectuado precedentemente con las maniobras relacionadas con el delito de blanqueo de capitales de origen delictivo que aquí se investigan, tal como lo anticipé, de los elementos colectados en autos se desprenden numerosos indicios que no me permiten descartar, sin más, las sospechas que pesan sobre la falta de licitud de los fondos con los que habría operado COMPAÑÍA DE INVERSIONES BURSÁTILES S.A. para concretar las operaciones bursátiles cuestionadas.

En tal sentido, considero que en autos existen concretos, graves y concordantes indicadores de riesgo de lavado de activos de origen delictivo por parte de los representantes de la empresa COMPAÑÍA DE INVERSIONES BURSÁTILES S.A., distintos a los delitos de evasión atribuidos a los titulares de las cuentas comitentes.

**a. Los ilícitos denunciados como delito precedente**

Tengo en cuenta las diversas hipótesis delictivas que se investigan en autos y que quienes fueron señalados en autos como presuntos autores de las maniobras de los delitos de lavado de activos -Gustavo Víctor Brachetta, Gustavo Nicolás Brachetta, Santiago Alberto Brachetta, Alberto Rafael Bianchetto, Guillermo Luis Borio y Enrique

*Fecha de firma: 19/05/2022*

*Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA*

*Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA*

*Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA*

*Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA*



#24640408#327518420#20220519131403960



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 5761/2015/CA7

Rubén Juncos- además se encuentran sindicados aquí como presuntos integrantes de una organización criminal en los términos del art. 210 del CP.

En efecto, en autos se investiga la presunta conformación de una organización criminal que habría tenido por objeto la comisión de delitos contra el orden económico y financiero.

Concretamente, como finalidad delictiva sus integrantes se habrían propuesto la comisión de los ilícitos relacionados con las figuras penales de **lavado de activos de origen ilícito** (art. 303 del CP) -en concurso ideal con la omisión de informar operaciones bursátiles (art. 311, segundo párrafo), **intermediación financiera no autorizada** (art. 310 del CP) y **compraventa de moneda extranjera sin autorización legal** (régimen penal cambiario previsto por ley 19.).

Ahora bien, aunque por distintos motivos el Juez de la causa desechó la configuración de los delitos de evasión de tributos por parte de los titulares de las cuentas comitentes, tales circunstancias no constituyen razón suficiente para sostener que no ha podido comprobarse la ilicitud de los fondos con los que se habrían concretado las operaciones de bolsa dentro de la firma Compañía de Inversiones Bursátiles S.A.

Es que más allá de la hipótesis fiscal que gira en torno de una supuesta procedencia ilícita de los fondos por estas supuestas evasiones fiscales y aunque en autos el Juez de la causa dictó el sobreseimiento de los encartados en orden a los delitos de omisión de informar operaciones con valores negociables y de intermediación financiera no autorizada -por prescripción de la acción penal- dicha circunstancia **no libera ni borra el carácter ilícito de las conductas involucradas por el hecho previo.**

Fecha de firma: 19/05/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#24640408#327518420#20220519131403960

En efecto, el representante del Ministerio Público Fiscal hizo mención a dicha cuestión al momento de la requisitoria cuando indicó *"un alto porcentaje del inmenso volumen de operaciones bursátiles que allí se realizaban, correspondían a personas que no tendrían la capacidad económica para realizarlas, por lo que se puede inferir inicialmente que esos comitentes **estarían ingresando al circuito legal y reglamentario fondos que no habrían sido ingresados en su patrimonio con el correspondiente control fiscal,** por lo que podrían ser presumiblemente provenientes de ilícitos fiscales como lo es la evasión tributaria o ilícitos de otra naturaleza, lo que en definitiva podría configurar el delito de lavado de activos, situación ésta que deberá ser dilucidada en el marco de la instrucción que se solicita a partir de las operaciones periciales que VS deberá ordenar"* (el resaltado es mío).

En tal sentido, conforme ya fue señalado, si bien el hecho antecedente al lavado de dinero solo puede ser un ilícito penal, no interesa si este es un hecho culpable o punible, sino que basta que haya sido típico y antijurídico, por tanto ilícito, como ya dije.

Consecuentemente, la prescripción de la acción penal del hecho previo no lo libera ni borra el carácter ilícito de las conductas involucradas.

Así lo ha entendido la doctrina al dejar sentado que *"la responsabilidad penal por prescripción de la acción de ningún modo quita el carácter ilícito del comportamiento. De hecho "el sujeto pudo ser punible" porque su conductas es ilícita, pero el transcurso del tiempo aconseja no sancionar a su autor. Un ilícito prescripto es un hecho típico y antijurídico"*(Castellucci,

~~Mariano Jesús. Revista Nueva Crítica Penal. Política Penal,~~

Fecha de firma: 19/05/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#24640408#327518420#20220519131403960



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 5761/2015/CA7

Criminal Crítica y Derecho Humanos. Vol. 1 N°2, Ed. Eudem, año 2020, pág. 168).

Al respecto, debe recordarse el instituto de la prescripción en materia penal encuentra fundamento en el hecho social según el cual el transcurso del tiempo conlleva el olvido y el desinterés del castigo (Soler, Sebastián: "Derecho Penal Argentino", Tea, Buenos Aires, 1992, Tomo II, pág. 543).

Con el mismo alcance se ha expedido la doctrina especializada en la materia cuando sostuvo que *"la existencia de una causa de extinción de la responsabilidad criminal no impide mantener que se ha cometido un hecho típico y antijurídico, con lo que se cumple el requisito exigido por el tipo de blanqueo"* (Blanco Cordero, Isidoro. *El blanqueo de capitales*, Ed. Thomson y Reuters - Aranzadi, Pamplona año 2015, pág. 380).

Similares consideraciones deben efectuarse respecto de las conductas relacionadas con la infracción al **Régimen Penal Cambiario previsto por Ley 19.359** que fueron puestas en conocimiento por los denunciantes Tomas Méndez y Marcelo Castro -conductor y productor, respectivamente del programa de televisión "ADN"- al Fiscal Federal por entonces interviniente.

De los términos de la denuncia efectuada por parte dichas personas se puede extraer que se puso en conocimiento y a disposición de las autoridades la existencia de unas filmaciones -a modo de cámaras ocultas- de personas que habrían efectuado operaciones de intercambio de divisas en las oficinas de la empresa COMPAÑÍA DE INVERSIONES BURSÁTILES S.A. y Gordon SA, siendo que ninguno de los involucrados en dichas operatorias habrían contado con autorización del BCRA para ejercer

---

Fecha de firma: 19/05/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#24640408#327518420#20220519131403960

legalmente tales actividades (ver fs. 1/2vta. de estos actuados).

Sin perjuicio de que la investigación de los ilícitos cambiarios denunciados en autos correspondía al Banco Central de la República Argentina mediante la sustanciación del sumario respectivo, lo cierto es que tales hechos revisten el carácter de "hechos ilícitos previos", puesto que las transgresiones al régimen penal cambiario previsto por Ley 19.359, **se trata de conductas ilícitas cuya sanción es naturaleza jurídica penal** y no contravencional, como mal sostuvo el Juez de la causa en su resolución.

Al respecto debe tenerse en cuenta que el llamado derecho penal cambiario es un *"como el conjunto de normas de derecho público y naturaleza penal, sustancial y procesal que tipifican las conductas ilícitas y sancionan a los sujetos que intervienen en las operaciones cambiarias"* (Gerscovich, Carlos. Derecho Económico Cambiario y Penal, Lexis Nexis, Buenos Aires, año 2006, pág. 325).

Se trata de un instrumento legal que busca proteger entre otros bienes, los fines y políticas económicas del Estado mediante la aplicación de sanciones netamente punitivas -pena de multa, para los infractores primarios; penas de prisión y multas agravadas, para casos de reincidencia- a las que les resultan plenamente aplicables las disposiciones del Libro Primero del Código Penal, salvo cuando sean incompatibles de acuerdo con lo expresamente por dicha ley (art. 20 del Régimen Penal Cambiario previsto por Ley 19.359).

Debe destacarse aquí que aunque se pretenda justificar o minimizar este tipo de conductas aludiendo a ~~la imposición de "cepos cambiarios" y la necesidad de la~~

Fecha de firma: 19/05/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#24640408#327518420#20220519131403960





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 5761/2015/CA7

gente de adquirir dólares en el mercado informal, tal como se sostuvo en la resolución cuestionada, de la prueba colectada claramente surge que no se tratarían de hechos aislados ni ocasionales, sino de conductas reiteradas, sistemáticas y habituales en las que se manejaban importantes sumas de dinero.

Asimismo, debe resaltarse la estrecha vinculación que puede darse entre las maniobras de lavado de dinero y el cambio de divisas extranjeras sin control estatal.

Para ilustrar este fenómeno desde el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se ha expresado que *"Los recicladores cuentan con una serie prácticamente ilimitada de métodos idóneos para convertir una moneda en otra. Con todo, la amplitud del abanico de posibilidades se encuentra en íntima conexión con el grado de flexibilidad del régimen de control de cambios imperante en el país de que se trate. Evidentemente, el método más sencillo de conseguir divisas consiste en acudir a un intermediario financiero para solicitar allí la cuantía deseada en la especie que se necesite. Sin embargo, las limitaciones impuestas por la legislación vigente –establecimiento de topes máximos de adquisición de moneda extranjera, necesidad de conocer la identidad completa del solicitante y el destino de la moneda, exigencias de orden formal como la obtención de la pertinente autorización administrativa, dilaciones en el tiempo, etc.– pueden llevar a quienes se dediquen al blanqueo de dinero sucio a optar por otros cauces alternativos, dotados o no de cobertura legal"* (Caparrós, Eduardo Fabián en "Combate al lavado de activos desde el sistema judicial" Organización de los Estados Americanos – OEA – Departamento contra la Delincuencia Organizada

Fecha de firma: 19/05/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#24640408#327518420#20220519131403960

Transnacional (DDOT) Quinta Edición 1889 F Street, N.W., Washington, D.C. 20006, USA. Pág. 80, el resaltado me pertenece).

De ello se sigue que la elusión del cumplimiento de obligaciones formales como ser la identificación del cliente que vende o compra moneda extranjera, los importes de las operaciones, la obligación de informar a los órganos de control, etc., resulte especialmente ventajoso tanto para las personas o establecimientos que prestan este servicio clandestino, como para los titulares de los activos ilícitos.

Al mismo tiempo, este marco de clandestinidad también permite lograr cuantiosas ventajas económicas no solo por el cobro de comisiones que no se declaran ante el Fisco, sino por la posibilidad de percibir considerables remuneraciones por colaborar en el proceso de reciclaje de capitales de origen delictivo.

Conforme a lo expuesto, corresponde hacer extensivas las consideraciones efectuadas precedentemente respecto de los hechos relacionados con los delitos de omisión de informar operaciones con valores negociables y de intermediación financiera no autorizada que fueron declarados prescriptos en autos, en el sentido de que las conductas ilícitas vinculadas con la compraventa ilegal de divisas extranjeras denunciadas en autos, **también se tratan de hechos típicos y antijurídicos susceptibles de generar recursos de origen delictivo** que perfectamente pueden ser canalizados mediante la utilización de las maniobras de lavado de activos que se siguen en autos.

Finalmente, cabe agregar que en virtud de los acogimientos al Régimen de Sinceramiento Fiscal previstos por la Ley 27.260 -efectuados por parte de la mayoría de ~~los titulares de las cuentas comitentes ante AFIP-DGI-~~, el

Fecha de firma: 19/05/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#24640408#327518420#20220519131403960



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 5761/2015/CA7

Juez de la causa refirió a la imposibilidad de que avancen las verificaciones del Fisco y, consecuentemente, la falta de determinación de delito de evasión de los propios imputados.

Sin embargo, la cuestión merece dos aclaraciones.

Primero, con fecha 11.11.2018 este Tribunal revocó los sobreseimientos dictados en favor de Javier Fernando Guevara Amado, Gabriel Alberto Ludueña, Leonardo Fabián Petiti y Gustavo Alberto Katz que figuran como titulares de las cuentas comitentes, junto con la firma GORDON SA, **sin que al día de la fecha el Juez de primera instancia haya resuelto la eventual procedencia o no de las adhesiones al régimen de sinceramiento fiscal ni, en definitiva, las situaciones procesales** de los nombrados que los vinculan con los supuestos delitos contra el régimen penal tributario (art. 279 de la Ley 27.430) (ver fs. 4721/4731).

Segundo, las supuestas imposibilidades para continuar con las verificaciones en los términos del art. 18 de la Ley 24.769 a las que aludió el Organismo Fiscal, no constituyen una decisión jurisdiccional que anule la tipicidad de la acción criminal.

Tal ha sido el entendimiento que ha seguido la Cámara de Casación Penal cuando a propósito de la cuestión planteada sostuvo que *"...más allá del argumento que al respecto puede brindarse, resulta incluso ilógico el planteamiento cuando los propios magistrados supeditan la resolución final sobre el ilícito de la evasión, a la condición del pago de la deuda. No puede llevarse a un delito posterior y autónomo (lavado de dinero), una decisión que aún no ha sido ni siquiera elaborada respecto del ilícito precedente (evasión fiscal"* (CFCP, en autos **"Bustamante, Francisco Carlos y otros s/ recurso de casación"**. Resolución del 26.5.2017).

Fecha de firma: 19/05/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#24640408#327518420#20220519131403960

En virtud de todo lo expuesto, cabe concluir que no resulta fundamento válido ni suficiente la invocación de una supuesta falta de determinación de las evasiones tributarias para descartar la ilicitud de los fondos utilizados en las transacciones bursátiles por parte de los miembros COMPAÑÍA DE INVERSIONES BURSÁTILES S.A., tal como lo ha entendido el magistrado en su resolución.

De ningún modo, puede soslayarse la valoración de los demás ilícitos que aquí se investigan y los que fueron denunciados en autos, de acuerdo con los parámetros señalados en la presente resolución.

**b. Del dinero en efectivo secuestrado en las oficinas la de Compañía de Inversiones Bursátiles S.A. y el fallo Mera de la CSJN y las “meras infracciones administrativas”**

En primer lugar, debe señalarse que dada la naturaleza **esencialmente fungible del dinero**, no resulta descabellado -como supone el Fiscal de la causa- que los fondos incautados fueran utilizados eventual y concomitantemente para diversos fines ilícitos, como ser **la canalización de numerosas operaciones ilegales de cambio de divisas extranjera que también se llevaban a cabo por parte de los miembros de COMPAÑÍA DE INVERSIONES BURSÁTILES S.A.**

Cabe destacar al respecto que al momento del secuestro del dinero en efectivo -esto es, siete millones de pesos (\$7.000.000) y trescientos cincuenta mil dólares (Usd 350.000)- se encontraba oculto en cajas de cartón en las distintas oficinas de la empresa **COMPAÑÍA DE INVERSIONES BURSÁTILES S.A.**

Respecto del dinero en efectivo secuestrado en las oficinas de COMPAÑÍA DE INVERSIONES BURSÁTILES S.A., tampoco comparto las conclusiones del Juez de la causa ~~acerca de que los dichos de los testigos~~ Martha Nilda

Fecha de firma: 19/05/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#24640408#327518420#20220519131403960



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 5761/2015/CA7

Techera, Néstor Nilo Cargnelutti, Eduardo Alexis Moisés y Jorge León Kaplan permiten inferir que dichos fondos en moneda papel habrían tenido como finalidad las operaciones bursátiles, para las cuales la empresa contaba con autorización legal.

En primer lugar, debo decir que en los presentes autos no se encuentra controvertido que los fondos utilizados por COMPAÑÍA DE INVERSIONES BURSÁILES S.A. hayan tenido un destino diferente, ni se ha puesto en dudas la veracidad de las operaciones de compraventa de títulos y acciones efectuadas por las personas mencionadas.

En este punto, debe aclararse que resulta manifiestamente improcedente e inaplicable al caso de autos la cita del fallo "Mera" de la CSJN que declaró inconstitucional el art. 2 de la Ley 25.345 por parte del Juez en su resolución, pues allí se declaró irrazonable la prohibición de computar deducciones, créditos fiscales y demás efectos tributarios que correspondan al contribuyente o responsable, aun cuando éstos acrediten la veracidad de las operaciones, por el mero incumplimiento de requisitos formales.

En efecto, en dicho pronunciamiento judicial el Máximo Tribunal decidió *"...confirmar la sentencia que revocó las resoluciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos que habían intimado al actor a abonar sumas de dinero en concepto del impuesto a las ganancias e IVA como consecuencia de impugnar gastos con fundamento en que el accionante abonó en efectivo algunas compras efectuadas a sus proveedores, por cifras superiores a \$ 1.000, es decir, sin ajustarse a los medios de pago previstos en el art. 1° de la ley 25.345 -aplicando lo dispuesto en el art. 2° de ese ordenamiento (modificado por la ley 25.413), conocido como "ley antievasión"- ya*

Fecha de firma: 19/05/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#24640408#327518420#20220519131403960

que esta última norma establecía en el caso una ficción legal que pretendía desconocer o privar de efectos a operaciones relevantes para la correcta determinación de la base imponible y cuya existencia y veracidad ha sido fehacientemente comprobada, lo que determina su inconstitucionalidad.” (Mera, Miguel Ángel (TF 27.870-I) c/ DGI. Sentencia del 19.3.2014).

Por ello, no debe perderse de vista que de lo que aquí se trata es del aprovechamiento que deriva de la celebración de operaciones bursátiles -y de la autorización legal de la CNV con la que contaba COMPAÑÍA DE INVERSIONES BURSÁTILES S.A.-, para integrar bienes de origen delictivo dentro de la economía formal y, de tal modo, darles apariencia de legitimidad mediante el proceso de adquisición y ventas de títulos valores.

El hallazgo de esas importantes sumas de dinero -tanto en pesos como en dólares- al momento de los allanamientos de fechas 19.6.2014 y 11.9.2015, en la sede de la firma COMPAÑÍA DE INVERSIONES BURSÁTILES S.A.- junto con los testimonios ponderados que dan cuenta de la utilización de fondos en moneda papel, además evidencian una flagrante situación de irregularidad respecto del cumplimiento de las normas de prevención de lavado de activos.

No resulta ser dato menor que una sociedad de bolsa de la envergadura de COMPAÑÍA DE INVERSIONES BURSÁTILES S.A. haya operado en forma habitual y sistemática con dinero en efectivo **siendo que tales conductas les estaban especial y legalmente vedadas**, precisamente para prevenir maniobras relacionadas con el blanqueo de capitales de origen delictivo como las que en autos se investiga.

En este contexto, no parecen casuales los ~~reiterados y sistemáticos incumplimientos de las normas de~~

Fecha de firma: 19/05/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#24640408#327518420#20220519131403960



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 5761/2015/CA7

prevención de lavado de activos por parte de los integrantes de COMPAÑÍA DE INVERSIONES BURSÁTILES S.A.

De la prueba colectada en autos no solo se desprende el cabal conocimiento de las obligaciones legales respecto de la normativa que debían cumplir los miembros de COMPAÑÍA DE INVERSIONES BURSÁTILES S.A. en carácter de sujeto obligado que pesaba sobre dicha firma, sino también, la capacitación y formación profesional de los imputados en materia de lavado de activos.

A modo de ejemplo se puede citar la información que fue extraída de los cuerpos de prueba donde surge: *"25/02/2011 40 recomendaciones - GAFI. Pdf", "17/08/2011 743 - PROCEDIMIENTO INTERNO PARA TRAMITAR DENUNCIAS.pdf, 17/08/2011 744 - REGLAMENTACIÓN DE OPERACIONES DE VENTA EN MONEDA EXTRANJERA.pdf; 25/02/2011 La AFIP y el lavado de dinero.doc"; 25/02/2011 Ley 25246.doc, 25/02/2011 Prevención de lavado de activos.doc"* y once (11) resoluciones de la UIF dictadas desde el año 2007 hasta el año 2011 (ver fs. 228 del "CUERPO IV- Cuerpo de pruebas en autos Brachetta, Gustavo Víctor y otros". Expte. 67671/14 (fs. 01/313).

Asimismo, debe destacarse que Gustavo Nicolás Brachetta además de ser contador público y también estar matriculado en el Consejo de Ciencias Económicas de Córdoba, de las constancias de la causa surge su vasta experiencia en el sector bursátil desde el año 1970, según apuntó en su curriculum que obra incorporado en autos (ver fs. 132 del "CUERPO IV- Cuerpo de pruebas en autos Brachetta, Gustavo Víctor y otros". Expte. 67671/14 (fs. 01/313).

Lo mismo debo decir respecto de su hijo, Gustavo Nicolás Brachetta -también de profesión contador público y ~~matriculado en el Consejo de Ciencias Económicas de~~



Córdoba-de la lectura de su "*curriculum vitae*" se advierte que el primer curso de capacitación profesional que tomó fue sobre "Normativa sobre prevención de Lavado de Dinero RG 33/2011", entre otros cursos de especialización (ver fs. 135 del "CUERPO IV- Cuerpo de pruebas en autos Brachetta, Gustavo Víctor y otros". Expte. 67671/14 (fs. 01/313).

En este estado de cosas, no escapa al suscripto que las exigencias de las normas antilavado a las que se hizo referencia oportunamente y que eran cabalmente conocidas por los encartados, desde su entrada en vigencia, especialmente con el dictado de la Resolución N°33/2011 de la UIF, generaron suspicacias por parte de las entidades bancarias.

Sobre el particular, viene al caso mencionar la contundencia de la nota cursada por el contador Argos Rodríguez Machado -en representación de MERCADO DE VALORES S.A.- al Dr. Matías González en calidad de gerente de la firma Intermediarios Bolsa y Valores, con fecha 18 de octubre de 2011 que se encontró en poder de COMPAÑÍA DE INVERSIONES BURSÁTILES S.A. al momento del allanamiento y que obra incorporada en los cuerpos de prueba.

De la lectura de dicho documento se vislumbran los inconvenientes que generó en el "normal funcionamiento" de las cuentas corrientes de los bancos con los que operaban los agentes de bolsa -entre ellos COMPAÑÍA DE INVERSIONES BURSÁTILES S.A.-, donde en muchos casos se invitó al cierre de las cuentas con las que operaban y en otros, donde directamente se impedía su apertura.

A propósito de ello, resultan elocuentes las razones que les fueron esbozadas, como ser "*...políticas internas del Banco*", "*el sector bursátil es considerado muy riesgoso*", "*por normas internas del banco*", "*las cuentas son deficitarias para la Entidad*". Etc. En ciertos

Fecha de firma: 19/05/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#24640408#327518420#20220519131403960





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 5761/2015/CA7

*casos se ha llegado a solicitar el motivo de la operatoria en cuanto a los depósitos en efectivo, por cualquier motivo, en la cuenta corriente y a no seguir cursándolos más y exigir certificación de contador en la que se detalle que los depósitos corresponden a clientes para inversiones que nos encarguen, ignorando por completo la actividad bursátil y sus nuevas regulaciones. Pero lo concreto es el tema de las exigencias internas en materia de encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo, en especial los referido a la resolución N°33/2011 de la UIF" (ver fs. 190 del "CUERPO IV- Cuerpo de pruebas en autos Brachetta, Gustavo Víctor y otros". Expte. 67671/14 (fs. 01/313).*

En este contexto adquiere suma relevancia la nota cursada con fecha 29.9.2011 al Banco de Galicia y Buenos Aires SA y suscripta por Gustavo Víctor Brachetta, que da cuenta del cabal conocimiento de las obligaciones que pesaban sobre COMPAÑÍA DE INVERSIONES BURSÁTILES S.A. a los fines de adoptar las políticas de prevención del lavado de activos dentro del seno de su empresa.

De dicho documento surge que la actividad de COMPAÑÍA DE INVERSIONES BURSÁTILES S.A. se **ajustaba a toda la normativa sobre encubrimiento y lavado de activos prevista por la Resolución N°33/2011 de la UIF**. En efecto, de su lectura puede extraerse que el nombrado, en su calidad de presidente de COMPAÑÍA DE INVERSIONES BURSÁTILES S.A. expresó que *"Constituimos una pequeña célula del mercado de capitales y somos "Sujetos Obligados" igual que su prestigioso Banco por lo cual se toman todos los recaudos en cuanto a conocimiento de nuestros comitentes y su adecuada identificación y perfil como inversos tendientes a detectar operaciones inusuales y sospechosas, ~~para lo cual contamos con el correspondiente Manual de~~*

Fecha de firma: 19/05/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#24640408#327518420#20220519131403960

**Lavado de Dinero y la designación del Oficial de Cumplimiento".**

"En cuanto a los Ingresos y Egresos de fondos en sus diferentes formas está todo reglamentado por la Circular N° 761 del Mercado de Valores de Córdoba S.A.SA aprobado por la Comisión Nacional de Valores con vigencia a partir del 20 de diciembre de 2010, la cual comentamos a Uds. personalmente y adjuntamos a la presente".

"Referente a los ingresos de fondos de nuestros comitentes se confecciona una nota de crédito detallando origen y licitud de los mismos firmado por el comitente en carácter de declaración jurada y dependiendo del cliente por diversas razones(edad, incapacidad, seguridad, tiempo, etc.) le brindamos el servicio de depositar en el banco en nuestra cuenta corriente por su cuenta y orden los importes a invertir, esas boletas de depósito una por cada comitente se adjunta a la nota de crédito respectivo y es archivada **para su posterior confrontación ante las auditorias periódicas que efectúa el Mercado de Valores o cualquier otro Organismo**".

"Referente a los montos de los comitentes depositados en nuestra cuenta corriente ya sean estos en efectivo, cheques, transferencias, se cumple estrictamente lo normado en el artículo 15 de la Resolución 33/20111 de la UIF. En los ingresos que igualan o superan los \$40.000 (pesos cuarenta mil) se exige la presentación de declaración jurada referida al origen y licitud de los fondos, y cuando igualan o superan la suma de \$200.000 (pesos doscientos mil) además se adjunta la documentación respaldatoria que apruebe fehacientemente lo expresado en la declaración jurada".

"Referente a los egresos de fondos por operaciones, ~~se confecciona una nota de débito donde se detalla el~~

Fecha de firma: 19/05/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#24640408#327518420#20220519131403960



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 5761/2015/CA7

*monto, concepto de pago, n° de cheque y a pedido del cliente el cheque puede ser emitido "no a la orden" para su cobro por ventanilla o cruzado para su depósito o transferencia mediante endoso".*

*Cuando el pago es emitido con cheque sólo se pueden librar dos por día por cliente, se fotocopian los cheques y se adjuntan en concepto de rentas y amortización de valores negociados de renta fija, renta variable (dividendos) y sus accesorios" (ver fs. 192/194 del "CUERPO IV- Cuerpo de pruebas en autos Brachetta, Gustavo Víctor y otros". Expte. 67671/14 (fs. 01/313).*

### **c. Del reiterado y sistemático incumplimiento de las normas de prevención de lavado de activos**

Ante todo, debo decir que en el marco de estos actuados cabe asignar vital importancia a las reiteradas irregularidades constatadas acerca de la violación de la normativa dictada para la prevención del lavado de activos de origen delictivo dentro del ámbito del mercado de capitales.

En este punto, comparto las apreciaciones del Fiscal Federal interviniente cuando indicó que *"En el ámbito bursátil no existe ninguna posibilidad de manejar dinero físico de tal magnitud por expresas directivas bursátiles y bancarias, precisamente para que todas las operaciones queden bancarizadas y evitar así diferentes tipos de delitos como evasiones y lavados de activos"* (ver fs. 4848/4864vta.).

Es que de cara al cumplimiento de las normas antilavado dictadas en el marco de los compromisos internacionales asumidos por nuestro país, no puede pasarse por alto la actividad calificada como "naturalmente riesgosa" de los agentes de bolsas.



Va de suyo que -al menos en el plano formal- la esencia del negocio radica básicamente en el manejo de fondos de terceros para inversiones de clientes que confían en su prestigio y seriedad.

En este contexto, aparece sumamente desdibujado el acabado cumplimiento de las normas de prevención de lavado de activos según las manifestaciones vertidas por Gustavo Víctor Brachetta en su nota al Banco Galicia, a la que me referí oportunamente.

Contrariamente a ello, de las constancias de la causa se desprende claramente la reiterada inobservancia de las diversas resoluciones **que limitaban el uso de dinero en efectivo** cuando se trate de sumas superiores a los mil pesos (\$1.000) **desde el año 2010** no sólo por las normas generales mencionadas, sino también las dictadas en forma específica para el mercado bursátil.

Lo mismo debo decir respecto de la **Circular N° 761** de MERCADO DE VALORES S.A. que desde la misma época instruían a los Agentes y Sociedades de Bolsa que operaban con dicha entidad a utilizar los medios de pagos previstos por el art. 1 de la Ley 25.345 (ver fs. 503/vta.).

Caben las mismas consideraciones respecto de los deberes derivados de la condición de **sujeto obligado** que ostentan los agentes y sociedades de bolsa desde la sanción de la Ley 25.246.

Muestra de ello es la actitud omisiva asumida por COMPAÑÍA DE INVERSIONES BURSÁTILES S.A. respecto de sus deberes de reportar operaciones sospechosas.

En tal sentido, de autos se desprende que frente al mismo supuesto transaccional, diversas entidades bancarias procedieron a emitir los reportes de operaciones sospechosas respecto de las operaciones efectuadas por la ~~firma COMPAÑÍA DE INVERSIONES BURSÁTILES S.A.~~ y respecto de

Fecha de firma: 19/05/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#24640408#327518420#20220519131403960



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 5761/2015/CA7

la empresa GORDON S.A. (ver fs. 423/423bis, de estas actuaciones).

En virtud de todo lo expuesto, en modo alguno pueden ser ponderadas como simples o "meras contravenciones de naturaleza administrativa" las irregularidades reiteradas y sistemáticas constatadas, toda vez que su estricta observancia exige ser analizada dentro de la faz claramente preventiva del delito de lavado de activos.

Sobre dicha cuestión, vale traer a colación que este Tribunal con fecha 18 de diciembre de 2018 -por mayoría y por adhesión del suscripto al voto del Dr. Ignacio María Vélez Funes- ya se había expedido en términos similares cuando sostuvo que *"...resulta inaceptable que el incumplimiento de las normativas citadas sea entendido por la Instrucción como "meras infracciones administrativas" siendo que, justamente, el incumplimiento de dichas disposiciones legales resultan ser indicio de configuración de este tipo de ilícitos de orden económico y financiero"* (ver fs. 4594/4610vta., de autos).

No obstante ello, la importancia del cumplimiento de las normas de prevención de lavado de activos no debe ser subestimada bajo el concepto de que se tratan de normas de naturaleza administrativas distintas de un ilícito penal, tal como lo hizo el juez de la causa cuando dijo que *"...la inobservancia de tales disposiciones, como es la utilización de un medio de pago irregular para las operaciones bursátiles, constituiría una mera infracción administrativa, cuya sanción corresponde a la Comisión Nacional de Valores, conforme a lo contemplado en la ley 26.831 (arts. 19 y 132) y no un ilícito penal"*.

Por su parte, debe tenerse presente que la finalidad esencial de las sanciones que aplica La UIF *"...es la prevención y disuasión de conductas reprochables y que,*

Fecha de firma: 19/05/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#24640408#327518420#20220519131403960

en función de ello, no sólo se tiende a evitar la reiteración de los incumplimientos por parte del sumariado sino también la confirmación de la vigencia y efectividad de las normas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. **Que el cumplimiento por parte de los sujetos obligados de las obligaciones legales y normativas a su cargo cobra especial relevancia en el esquema preventivo en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo, ya que los mismos pueden llegar a convertirse en intermediarios entre el origen ilícito de los fondos y su posterior blanqueo y, como se ha dicho, cumplen una función primordial en la prevención de dichos delitos ya que son quienes originariamente brindan la información para que esta Unidad pueda cumplir con su cometido de ley.** Es por ello que se les exige, primordialmente, una doble-obligación: por un lado, elaborar y observar una política de identificación y conocimiento de sus clientes y, por otro, reportar a esta Unidad cualquier hecho u operación que resulte sospechosa en los términos de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias" (Resolución del 23.4.2019, Expediente N° 623/2012 del Registro la Unidad de Información Financiera).

Por ello, el cúmulo de estas irregularidades constatadas constituye, al menos, graves indicios que en el marco de estos actuados no encuentran razonable justificación.

**d. Del funcionamiento de Compañía de Inversiones Bursátiles S.A. y sus vínculos con Mercado de Valores S.A.**

Teniendo en cuenta que en varias oportunidades el Juez de la causa hizo referencia a la cuestión relacionada con la autorización legal para operar dentro del ámbito bursátil con la que contaba COMPAÑÍA DE INVERSIONES

Fecha de firma: 19/05/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#24640408#327518420#20220519131403960



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 5761/2015/CA7

BURSÁTILES S.A., debe aclararse que en estos actuados **no se encuentra en discusión la autorización de dicha firma para intermediar en el mercado de capitales** como agente de bolsa.

Tales expresiones no sólo no resultan conducentes para el análisis del delito de lavado de activos que aquí se investiga, sino que además desatienden el examen de la cuestión principal, esto es, del aprovechamiento por parte de los miembros de COMPAÑÍA DE INVERSIONES BURSÁTILES S.A. de una estructura lícita para cometer presuntos y diversos ilícitos que atentan gravemente contra el orden económico y financiero.

Por ello, insisto en que la hipótesis delictiva que se investiga en estos actuados radica en la presunta utilización de la estructura de una sociedad legalmente constituida para consumir distintos hechos ilícitos, incluido el delito de lavado de activos.

En efecto, de acuerdo con la plataforma fáctica de los hechos que baraja el Ministerio Público Fiscal, mediante la celebración de las operaciones bursátiles cuestionadas, los miembros de la agencia de bolsa mencionada habrían integrado bienes de origen delictivo dentro del circuito de la economía formal.

Justamente, de la autorización legal para operar lícitamente como agente de bolsa, la firma COMPAÑÍA DE INVERSIONES BURSÁTILES S.A., habría procurado darles apariencia de legitimidad a los activos espurios, mediante el proceso de adquisición y ventas de títulos valores.

En tal sentido, teniendo en cuenta el cambio legislativo que regulaba la actividad del mercado bursátil que operó con la derogación de la Ley 17.811 y la sanción de la Ley 26.831 de Mercado de Capitales -sancionada con

*Fecha de firma: 19/05/2022*

*Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA*

*Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA*

*Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA*

*Firmado(ante mi) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA*



#24640408#327518420#20220519131403960

fecha 29.11.2012 y promulgada el día 27.12.2012- resulta llamativo al día 4.9.2014, COMPAÑÍA DE INVERSIONES BURSÁTILES S.A. se encontraba realizando los trámites para encuadrarse en el nuevo marco legal, sin dar fechas concretas y amparándose en la falta de otorgación de nuevos registros por parte de la CNV(ver informe obrante a fs. 501/502).

De autos surge que con fecha 21.1.2014 Gustavo Víctor Brachetta solicitó a la CNV la registración de COMPAÑÍA DE INVERSIONES BURSÁTILES S.A. como "Agente de liquidación y compensación y agente de negociación - propio" de acuerdo a los requerimientos de la nueva normativa.

Asimismo, debo decir que durante la vigencia de la Ley 17.811 y hasta la sanción de la Ley 26.831 que, como es sabido regula actualmente la actividad bursátil, no escapa al suscripto que Gustavo Víctor Brachetta **ejerció al mismo tiempo la presidencia de COMPAÑÍA DE INVERSIONES BURSÁTILES S.A. y de MERCADO DE VALORES S.A.**

En efecto, conforme surge de autos desde el año 2005 hasta la actualidad, el nombrado fue integrante del directorio en calidad de presidente y responsable autorizado de COMPAÑÍA DE INVERSIONES BURSÁTILES S.A. y, concomitantemente, desde el año 2008 hasta el año 2012 aproximadamente, ejerció cargos de presidente y vicepresidente de MERCADO DE VALORES S.A. (Ver fs. 132 del "CUERPO IV- Cuerpo de pruebas en autos Brachetta, Gustavo Víctor y otros". Expte. 67671/14 (fs. 01/313) y fs. 390/392 de estos actuados).

Asimismo, **durante los años 2013 y 2014** -esto es, durante el lapso de tiempo investigado- Gustavo Víctor

**Brachetta también ejerció el cargo de Síndico Suplente en**

Fecha de firma: 19.04.2012

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#24640408#327518420#20220519131403960





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 5761/2015/CA7

MERCADO DE VALORES S.A. (ver fs. 132 del "CUERPO IV- Cuerpo de pruebas en autos Brachetta, Gustavo Víctor y otros". Expte. 67671/14 (fs. 01/313).

Además, cabe señalar que del sistema E-Fisco surge que COMPAÑÍA DE INVERSIONES BURSÁTILES S.A. tiene participación societaria en la empresa MERCADO DE VALORES S.A. (ver fs. 219 del Cuerpo de prueba "Brachetta" Expte. 6767/14 Expte FCB 5761/2015. INFORME CORA. LAURA ANDREOTTO).

Igualmente, de la declaración testimonial del contador Argos Rodríguez Machado -quien fuera gerente durante veinte años de MERCADO DE VALORES S.A. se pueden extraer algunas consideraciones de interés para la causa, cuando manifestó que aunque no son amigos, **durante la presidencia de Gustavo Víctor Brachetta entre los años 2010 y 2013, tuvo una relación funcional fluida con el imputado** (ver 3604bis/3606vta.).

Ahora bien, siendo que MERCADO DE VALORES S.A. habría tenido a su cargo el poder de policía sobre los agentes de bolsa, **no puede pasarse por alto el conflicto de interés que supone para una misma persona ser controlante y controlado a la vez.**

Máxime cuando se advierte que con fecha 16.7.2014, el presidente de MERCADO DE VALORES S.A. -Contador Héctor Marín, vicepresidente de la firma junto con Gustavo Víctor Brachetta desde el año 2010-, a requerimiento de la Fiscalía Federal interviniente presentó un informe que afirma que durante *"...el periodo de tiempo mencionado no existieron sanciones hechos motivos o inconductas que hayan afectado su registro como Sociedad de Bolsa"* (Ver fs. 298/300 y fs. 390/391).

---

Fecha de firma: 19/05/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#24640408#327518420#20220519131403960

Resulta, al menos, grave la aseveración de dichas afirmaciones cuando de autos surgen claramente los reiterados incumplimientos de las normas antilavado dictadas a las que se hizo referencia más arriba, en especial las dictadas por la UIF y la CNV.

Según las declaraciones del contador Argos Rodríguez Machado, la firma MERCADO DE VALORES S.A. habría practicado a cada agente, entre 3 o 4 auditorías o inspecciones por año siendo que el imputado y supuesto jefe de la organización criminal que aquí se investiga habría integrado diversos cargos de máxima responsabilidad y jerarquía dentro de dicha firma, incluso hasta la fecha de los allanamientos, esto es con fecha 19.6.2014 (ver fs. ver 3604bis/3606vta.).

Además, debe resaltarse que no solo respecto de COMPAÑÍA DE INVERSIONES BURSÁTILES S.A. pesan el cumplimiento de deberes y responsabilidades legales semejantes respecto del **sistema de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo**, sino también respecto de MERCADO DE VALORES S.A.

Por otro lado, cabe agregar que se constató que en el archivo enviado por MERCADO DE VALORES S.A., para el período 01/2013 a 01/2014 en la columna en donde se indica si las transacciones son de cartera propia, dice que "NO" (fs. 423).

Sin embargo, de las declaraciones del Cr. Argos Rodríguez Machado y que el Juez de la causa tuvo en cuenta en su resolución como dirimentes, no surge que sean concluyentes ni arrojan luz sobre la cuestión relacionada a la presunta utilización de cuentas comitentes por parte de los integrantes de la sociedad COMPAÑÍA DE INVERSIONES BURSÁTILES S.A. que no habrían sido declaradas como **propias**.

---

Fecha de firma: 19/05/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#24640408#327518420#20220519131403960



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 5761/2015/CA7

En efecto, de dicho testimonio se lee: *"la sociedad de bolsa puede ser titular de una cuenta comitente; que es normal, habitual y lógico que la sociedad sea titular de cuenta comitente. Agregando que el término "cartera propia" está en el capítulo de Ética del Reglamento operativo del Mercado y se utilizó para evitar conflictos en las operaciones. Para evitar estos conflictos de intereses, entre un cliente y el propio agente, el Mercado de Valores le requiere al Agente que identifique las cuentas que son de cartera propia"*.

Por lo tanto, de acuerdo con la hipótesis fiscal, considero que debe ser objeto de una profundización de la investigación la ocultación o no a los órganos de control de las cuentas comitentes que habrían sido de cartera propia de COMPAÑÍA DE INVERSIONES BURSÁILES S.A. y, si eventualmente, tales cuentas habrían sido utilizadas por terceras personas, toda vez que del sistema E-Fisco surgen varios nombres como cotitulares de dicha empresa.

Desde otro costado, y con relación a la imposibilidad de "determinar cuántas operaciones se habrían efectuado con el mismo capital", a la que hizo referencia el Juez de la causa de acuerdo con el testimonio de la Cra. Andreotto de AFIP-DGI, debo decir que tal exigencia constituye un típico caso de «prueba diabólica» mediante la cual se pretende exigir una prueba de difícil -e incluso de imposible acreditación-, pero no por su inexistencia, sino por el considerable grado de dificultad que implica su obtención.

Del informe presentado por la Cra. Laura Beatriz Andreotto de AFIP, se desprende que aunque sólo se hizo referencia al movimiento del dinero en su totalidad en cada una de las cuentas comitentes y propias de la empresa, es

Fecha de firma: 19/05/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#24640408#327518420#20220519131403960

cierto que ese dinero podría haber sido reinvertido en diversas operaciones bursátiles.

Sin embargo, también es cierto que existen otras posibilidades de acuerdo con el abanico de opciones con las que cuenta el cliente titular de una cuenta comitente toda vez que el mercado bursátil posee liquidez suficiente como para que en cuestión de horas, o incluso minutos, un inversor consiga vender una parte o la totalidad de su cartera.

Así, por ejemplo, con el dinero obtenido podrá comprar casi de inmediato otros activos bursátiles, dejar el capital disponible en su cuenta comitente esperando nuevas oportunidades de inversión, colocar los fondos en caución, o incluso esperar no más de 72 horas hábiles a los efectos de tener el dinero disponible **para efectuar cualquier operación fuera de la Bolsa.**

En base a lo expuesto considero que la cuestión planteada no resulta dirimente para la configuración de las maniobras de lavado que aquí se investiga puesto que independientemente de cuantas veces se haya utilizado o no el mismo dinero, basta con acreditar su origen ilícito, como ya se dijo, y que los importes superen la suma de pesos trescientos mil (\$300.000).

En virtud de todo lo expuesto hasta aquí, teniendo en cuenta el acabado conocimiento de las normas que regulan su actividad y, en especial, la capacitación profesional por parte de los miembros de COMPAÑÍA DE INVERSIONES BURSÁTILES S.A. en materia de lavado de activos, los reiterados y sistemáticos incumplimientos de dichas normativas se presentan, en principio, como parte de un plan preordenado cuyas decisiones fueron cuidadosamente establecidas y previamente encaminadas a mantener la

---

Fecha de firma: 19/05/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#24640408#327518420#20220519131403960



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 5761/2015/CA7

operatoria bursátil de COMPAÑÍA DE INVERSIONES BURSÁTILES S.A. dentro de una estructura de informalidad y de esta manera minimizar los controles de los organismos correspondientes.

### **3) Hechos vinculados con los delitos de asociación ilícita y asociación ilícita fiscal**

Ante todo, en orden a los agravios expuestos por la querellante AFIP-DGI, debo decir que comparto plenamente los fundamentos expuestos en cuanto a la autonomía del tipo penal de asociación ilícita -como de la asociación ilícita fiscal- respecto de los delitos que constituyen el objeto de las mismas.

En tal sentido, tal como lo sostuvo en su informe el Dr. Roberto Alejandro Bustos Marún en representación del Organismo Fiscal tanto la doctrina como la jurisprudencia sostienen pacíficamente que los delitos del art. 210 del CP y del art. 15 inc. c) del régimen penal tributario, son independientes de los particulares delitos que la asociación tenga por fin cometer.

Consecuentemente, la extinción de la acción penal de alguno de los delitos cometidos por sus miembros -como ser los de intermediación financiera no autorizada, omisión de informar operaciones con valores negociables o evasión tributaria- **no resta trascendencia penal a la existencia de una organización integrada por tres o más personas con el propósito de cometer delitos indeterminados.**

En efecto, comparto las observaciones de la querella en cuanto indicó que "la expresión vertida en la resolución recurrida, respecto de que no se vislumbra un acuerdo entre los imputados para cometer delitos fiscales porque "la mayoría de las inspecciones ordenadas en las presentes actuaciones, conforme a lo dispuesto en el

*Fecha de firma: 19/05/2022*

*Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA*

*Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA*

*Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA*

*Firmado(ante mi) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA*



#24640408#327518420#20220519131403960

artículo 18 de la ley 24.769, no pudieron avanzar, por encontrarse con el obstáculo de que los contribuyentes investigados se habían adherido a la ley de blanqueo de capitales (Ley 27.260" evidencia la confusión conceptual en la que incurrió el inferior al asimilar los delitos de asociación ilícita fiscal y evasión tributaria, siendo que el primero no requiere para su configuración de la efectiva comisión de los delitos tributarios.

Ahora bien, a los fines de dar mayor precisión acerca de los alcances que debe otorgarse a las figuras penales de asociación ilícita (art. 210 del CP) y de asociación ilícita fiscal (art. 15 inc. c) del régimen penal tributario previsto por la Ley 27.430, entiendo necesario fijar el marco normativo de los tipos penales en juego, tal como sostuve previamente mediante resolución del 3.9.2020 en autos "SALVUCCI, Sebastián - COSTANTINO, Alejandro Javier - PLA, Javier Antonio - SEIMANDI, Mauricio Alejandro sobre Infracción Ley 24.769" (Expte. 12812/2015/CA4).

Al respecto, debe señalarse que el art. 210 del Código Penal argentino que: *"será reprimido con prisión o reclusión de tres a diez años el que tomare parte en una asociación o banda de tres o más personas destinada a cometer delitos por el solo hecho de ser miembro de la asociación. Para los jefes u organizadores de la asociación el mínimo de la pena será de cinco años de prisión o reclusión."*

Recordemos que la conducta ilícita, según su ubicación normativa, reconoce como bien jurídico protegido el orden público (Código Penal, Título VIII), al tratarse, en tal sentido, de un delito que produce alarma en la comunidad, por la potencialidad criminal que representa,





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 5761/2015/CA7

atacando en definitiva el desenvolvimiento pacífico de la vida social.

Respecto de esta figura, la doctrina argentina coincide en señalar que los elementos de este delito son: a) tomar parte en una asociación; b) número mínimo de partícipes; c) propósito colectivo de delinquir. La acción prevista en el tipo consiste en tomar parte en una asociación o banda. Según la opinión que se refleja en parte de la doctrina y jurisprudencia argentinas, para la punibilidad de la conducta ya es suficiente con el mero "asociarse", de tal modo que, fuera de la existencia del pacto, no sería necesaria ninguna actividad exterior.

La existencia del grupo tiene por base un acuerdo entre sus miembros o "pacto", que no requiere formalidad alguna y que puede, asimismo, ser tácito, espontáneo. Es suficiente con que de la conducta total del autor se derive que él sujeta su voluntad a la del grupo, y de ese modo, se inserta en la organización. El carácter de miembro, por lo tanto, puede derivar de la propia realización de actividades en común.

En efecto, sobre la figura de asociación ilícita se ha dicho que: *"la prueba del **acuerdo criminoso** puede realizarse a través del método inductivo, es decir, partiendo desde los casos delictivos realizados hacia atrás, donde se encuentra la faz ideológica de esos planes individualmente considerados. "La 'marca' o las 'señas' de la o las asociaciones quedarán puestas en evidencia en la medida que se analice su modo de operar y la dirección hacia la que apuntan sus fines, los cuales, lógicamente persiguen la comisión de ilícitos determinados, ya que de lo contrario no tendría razón de existir la propia asociación..."* (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala II, en autos: "Demeyer,

Fecha de firma: 19/05/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#24640408#327518420#20220519131403960

Eduardo Rodolfo y otros s/prisión preventiva", Resolución del 10.05.2002).

Desde el punto de vista del tipo subjetivo, el delito de asociación ilícita no presenta particularidades especiales. El conocimiento de los elementos del tipo objetivo supone que el autor conoce que su conducta realiza un aporte a un grupo formado por al menos dos miembros más, cuyo objetivo es la comisión de delitos como objetivo principal de la asociación. La sola conciencia de que el logro del fin que la agrupación se propone exigirá la comisión ocasional o eventual de algunos delitos no basta.

En orden a sus características, constituye un delito de peligro permanente y de preparación, cuya consumación se produce por sí mismo y en el que el autor debe realizar un aporte efectivo que se traduzca exteriormente como tal frente a los otros miembros. Se exige pluralidad de componentes que, en el caso, la norma penal fija como mínimo el número de tres personas.

Asimismo, la asociación ilícita responde a una organización más o menos estable para la comisión de delitos indeterminados, cualesquiera sean, siendo indeterminados los planes que, para cometer delitos, acuerdan sus miembros. Lo que se requiere es que, como objeto, se tenga en mira una pluralidad de planes delictivos. En otros términos, lo que se exige es pluralidad de planes delictivos y no pluralidad de delitos.

Asimismo, continuando con sus exigencias típicas, según su forma de redacción, la asociación ilícita no requiere la consumación de los delitos para los cuales se conformó. Es un tipo penal de peligro abstracto, permanente que describe una conducta preparatoria respecto de los delitos subsiguientes.







## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 5761/2015/CA7

Respecto del **tipo especial de asociación ilícita fiscal**, consagrado por el legislador como política de Estado para reprimir la evasión tributaria traigo a colación las conceptualizaciones vertidas mediante adhesión a las consideraciones de los Vocales preopinantes que **"... lo que se reprime es la calidad de miembro de la asociación por el mero hecho de su creación, independientemente de que se consuma el objetivo criminal perseguido por la organización -los delitos fiscales-, no exigiéndose siquiera su comienzo de ejecución..."**.

La norma penal en cuestión resulta ser una figura especial respecto de la asociación ilícita (art. 210 del CP), que configura el tipo delictivo genérico. Nos encontramos, pues, en presencia de una relación de especialidad entre ambos tipos delictivos.

La asociación ilícita común se comporta como el tipo genérico que contiene ciertos requisitos que son compartidos **con el tipo especial previsto en la ley penal tributaria**, a saber: **a)** acuerdo de voluntades para conformar una asociación; **b)** permanencia de la organización; **c)** número mínimo de personas intervinientes (tres o más); **d)** pluralidad de fines delictivos.

En esta lógica, la figura especial de asociación ilícita tributaria se construye sobre la base de la misma conducta típica de aquel delito ubicado en la Parte Especial del Código Penal, agregando otros requisitos adicionales y específicos propios y diferentes.

Concretamente estas exigencias se refieren a ciertos elementos subjetivos del tipo objetivo, como es el propósito que debe regir el emprendimiento delictivo, es decir que la asociación esté **"destinada a cometer cualquiera de los delitos tipificados en la presente ley"**.

---

Fecha de firma: 19/05/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#24640408#327518420#20220519131403960

Es decir, cualquiera de los delitos previstos por el Régimen Penal Tributario.

Efectuadas estas aclaraciones conceptuales, corresponde abordar los agravios de los recurrentes en cuanto estiman que existe caudal suficiente de indicios claros, precisos y concordantes que dan mérito a un procesamiento en cuanto al tipo de asociación ilícita.

En efecto, de una ponderación completa, integral, contextual y sistemática de los elementos de prueba reunidos hasta el momento, no puede descartarse sin más que en autos existe un acuerdo criminal por parte de los encartados.

En orden a los cuestionamientos planteados por los recurrentes, comparto las consideraciones por ellos expuestas en el sentido que de la abundante prueba colectada no se desprende la certeza negativa necesaria para el dictado del sobreseimiento de los encartados en autos.

En efecto, los fuertes indicios de riesgo de lavado de activos de origen ilícito que fueron puestos de relieve en los párrafos precedentes, como las intervenciones telefónicas, el informe de la contadora Andreotto y demás elementos probatorios colectados en autos no deben ser ponderados en forma aislada y fragmentada, como lo ha hecho el Juez de la causa.

En este tópico, debo insistir una vez más en que la hipótesis inculpativa gira en torno a la presunta configuración de una organización criminal que se oculta tras la apariencia de la actividad lícita y bajo el amparo de las operaciones de bolsa y acciones para las cuales cuenta con la autorización legal para funcionar.

Tal como indicó la querrela en su informe, ~~pareciera que el Juez de la causa no tuvo en cuenta que las~~

Fecha de firma: 19/05/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#24640408#327518420#20220519131403960



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 5761/2015/CA7

valoraciones efectuadas en forma conjunta no solo confirmarían la operatoria irregular, sino también la imposibilidad de descartar la existencia de una voluntad común direccionada hacia fines ilícitos.

En este punto, cada una de las maniobras relacionadas con los incumplimientos de las normativas antilavado, dirigidas desde un lugar de control y supremacía en la cadena de mandos y responsabilidades de COMPAÑÍA DE INVERSIONES BURSÁTILES S.A., en forma alguna pueden ser consideradas como "meras infracciones administrativas".

Contrariamente, la habitualidad y permanencia por parte de COMPAÑÍA DE INVERSIONES BURSÁTILES S.A. de mantener toda su actividad en franca violación de las normas y recomendaciones legales para prevenir el lavado de activos de origen delictivo, sumado a las pruebas documentales que dan cuenta de las actividades de intermediación financiera y cambio de divisas sin autorización del BCRA, lejos está de aportar convencimiento acerca de la falta de participación de los integrantes en la conformación de una empresa criminal.

Finalmente, no puede soslayarse que, más allá de las conversaciones telefónicas, claramente se advierten las maniobras en contravención al régimen penal cambiario que se habrían efectuado por parte de los involucrados tanto adentro como afuera de las oficinas de COMPAÑÍA DE INVERSIONES BURSÁTILES S.A., los encartados ya tenían conocimiento de la investigación penal en curso.

Efectivamente, las intervenciones telefónicas efectuadas sobre los celulares de Santiago Brachetta y Alberto Bianchetta fueron ordenadas y efectivizadas luego de los allanamientos efectuados en autos.

---

Fecha de firma: 19/05/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#24640408#327518420#20220519131403960

En tal sentido, resultan elocuentes los diálogos entablados por los nombrados de los cuales surge que previendo un eventual control fiscal o policial habían dado a sus clientes indicaciones e instrucciones de cómo actuar ante un control, para lo cual eran alertados ante la posibilidad que se les realice un allanamiento (Ver fs. 1801).

En este mismo orden de ideas Santiago Brachetta habría comunicado a una tía con quien mantenía una conversación telefónica que Guillermo Borio y Gustavo Víctor Brachetta cambiaban permanentemente los teléfonos para evitar controles (Ver fs. 1095/vta).

Asimismo, debe tenerse en cuenta la constatación de una oficina oculta donde al momento del allanamiento -del 11.9.2015- fueron encontrados los empleados de la empresa COMPAÑÍA DE INVERSIONES BURSÁTILES S.A., sita en calle 25 de mayo 271, piso 7°. En dicha oportunidad se procedió a la incautación de los elementos probatorios que aún no han sido ponderados por parte del Juez de Instrucción.

Por ello, no comparto las apreciaciones vertidas por el magistrado cuando infiere que las transacciones de cambio de divisas sin autorización legal, las realizaban los imputados por cuenta propia y por fuera de la sociedad investigada.

Contrariamente, del examen de las escuchas se advierte que en numerosas ocasiones distintas personas se comunicaban con los empleados de COMPAÑÍA DE INVERSIONES BURSÁTILES S.A. para comprar o vender moneda extranjera y que dichas operaciones se perfeccionaban en las mismas instalaciones de la empresa.

En efecto, llamativamente el propio Juez de la causa alude en su resolución a dicha cuestión cuando ~~reconoce que "...los encartados compraban y vendían divisas,~~

Fecha de firma: 19/05/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#24640408#327518420#20220519131403960



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 5761/2015/CA7

*contactándose los clientes a sus celulares para posteriormente realizar tales operaciones en las oficinas de CIB SA., ubicadas en calle 25 de mayo 271, 9° piso de esta ciudad. Especialmente, hacía este tipo de operaciones cambiarias el contador Alberto "Toto" Bianchetta, tanto dólares estadounidenses como euros y reales (v. fs. 1216/75, 1298/1316, 1319/20, 1323/5, 1328, 1357 vta, 1545/7, 1570/2, 1658, 1820, 1825). Además, en varias ocasiones el contador Bianchetta le consulta a Gustavo - Brachetta- acerca de la cotización del dólar para realizar las operaciones".*

A diferencia del Instructor, y en línea con el titular de la acción penal, considero que no existe certeza de que las actividades desplegadas por los imputados no constituyan en realidad, diversos aportes a las maniobras delictivas constatadas sin las cuales los demás delitos en modo alguno habrían podido llevarse a cabo.

Las transcripciones de comunicaciones telefónicas de los coimputados Bianchetta y Brachetta constituyen precisamente indicios de una eventual participación criminal en la asociación ilícita que aquí se investiga.

En definitiva, siendo que en algunos casos se encuentra pendiente de diligenciar la extracción de la información de los celulares secuestrados con fecha 11.9.2015 y que respecto de los demás aparatos telefónicos aún no se ha procedido a la valoración de su contenido - cuya información ya se encuentra a disposición en los CD y DVD respectivos- corresponde revocar el sobreseimiento dispuesto debiendo profundizarse la investigación a su respecto.

---

Fecha de firma: 19/05/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#24640408#327518420#20220519131403960

#### IV. Etapa de instrucción inconclusa y medidas de investigaciones pendientes y pertinentes

Analizadas que fueran las presentes actuaciones, en primer lugar debe ponerse de resalto que este Tribunal **es la segunda vez que interviene en autos** a los fines de analizar la situación procesal de los encartados.

Con fecha 21 de diciembre de 2018, por mayoría y mediante adhesión del suscripto al voto del doctor Ignacio Vélez Funes, **se dispuso declarar la nulidad absoluta e insubsanable** la resolución dictada con fecha por el Juez Federal N° 1 de Córdoba con fecha 27 de febrero de 2018 en cuanto dispuso el sobreseimiento de los imputados Gustavo Víctor Brachetta, Lidia Beatriz Bertero, Gustavo Nicolás Brachetta, Alberto Brachetta, Santiago Brachetta, Alberto Rafael Bianchetta, Guillermo Borio, Enrique Rubén Juncos, Gabriel Alberto Ludueña, Leonardo Fabián Petiti y Gustavo Alberto Katz en orden a los delitos de asociación ilícita (art. 210 el CP), lavado de activos agravado por habitualidad (art. 303 punto 1 y punto 2 inc. a) del CP), en concurso ideal con falsedad documental financiera (art. 311 del CP), asociación ilícita tributaria (art. 15 inc. c) de la entonces Ley 24.769) e intermediación ilícita financiera (art. 310, primer párrafo del CP) **como así también el apartamiento del magistrado interviniente** (ver fs. 4594/4610vta. de estas actuaciones).

Asimismo, en dicha oportunidad también se ordenó la remisión de las actuaciones a la Secretaría de Superintendencia de este Tribunal a los fines de proceder a la designación del juez subrogante, quien debía emitir -en forma inmediata- nuevo pronunciamiento a efectos de definir la situación procesal de los nombrados (art. 173 del CPPN).

---

Fecha de firma: 19/05/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#24640408#327518420#20220519131403960



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 5761/2015/CA7

Cabe recordar que en dicha oportunidad, este tribunal sostuvo que el Juez Federal N° 1 de Córdoba no sólo **omitió valorar material probatorio esencial para determinar la configuración del ilícito en juego**, sino también incurrió en motivación defectuosa e insuficiente de la sentencia al ponderar elementos de prueba que no resultan conducentes para la solución del caso.

Ahora bien, tal como expuso el Fiscal Federal en su informe, aunque este Tribunal declaró la nulidad de la resolución dictada por el Juez Federal N° 1 de Córdoba, desde que el nuevo magistrado interviniente asumió la dirección de la investigación no solo no atendió a los fundamentos allí expuestos sino que además **no llevó adelante ninguna medida que impulse la instrucción y permita dilucidar la situación procesal de los encartados**.

Nótese al respecto que con relación a los celulares secuestrados **en los allanamientos del 19.6.2014** ni siquiera se procedió al análisis de la información extraída por el personal técnico dependiente de la Sección Informática Forense de la Dirección de Análisis Criminal y Tecnologías de la Información perteneciente a la Dirección General de la Policía Judicial de la provincia de Córdoba.

Efectivamente, en la caja nominada "Informes Técnicos Periciales" se encuentran reservados al menos veinticuatro (24) dispositivos celulares **cuyo contenido material no ha sido ponderado**, pese a que la información ya se encuentra disponible para su análisis por haber sido extraída por medio de la tecnología UFED -Universal Forensics Extraction Device-. (Ver Informes Técnicos N°1731278, N°1731284, N°1731288, N°1731298, N°1731615, N°1731619, N°1731638, N°1731656, N°1731659 y N°1731663).

Lo mismo debo decir respecto del IPAD color ~~plateado que se obtuvo como producto de los procedimientos~~

Fecha de firma: 19/05/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#24640408#327518420#20220519131403960

efectuados en el domicilio de COMPAÑÍA DE INVERSIONES BURSÁTILES S.A. (Ver Informe Pericial N° 1731302).

Es decir, del examen de los elementos incautados se desprende que **los aparatos telefónicos aún se encuentran dentro de las bolsas de nylon termo-selladas**, tal cual fueron entregadas oportunamente al Juez por parte de la Unidad de Equipos Móviles del Gabinete de Tecnología Forense, dependiente del Organismo mencionado precedentemente **sin que se haya procedido a su apertura y posterior examen.**

Consideraciones similares deben efectuarse del contenido de la caja titulada "25 de mayo 271, piso 7°. Allanamiento 11. Brachetta" FCB 5761/2015" que contiene los elementos probatorios incautados donde eventualmente habría funcionado una oficina oculta de la empresa COMPAÑÍA DE INVERSIONES BURSÁTILES S.A. Allí se observa la existencia de cinco (5) sobres -identificados con las letras A, D, E, F y G- **que preservan los aparatos telefónicos celulares cuya desintervención no ha sido ordenada ni efectuada.**

En este punto, de ninguna manera puede soslayarse la ponderación de la información extraída de los celulares que obra resguardada en los soportes informáticos pertinentes -en su mayoría, dispositivos DVD- para la investigación de este tipo de delitos contra el orden económico y financiero, máxime si las maniobras de lavado de activos y demás delitos se habrían desarrollado dentro de una organización criminal, como en el presente caso.

Por otra parte, debe hacerse mención a que, salvo lo relevado por la Contadora Andreotto de AFIP-DGI, durante la instrucción tampoco se procedió a examinar el contenido de las cajas de prueba que contienen constancias diversas documentales relacionadas con el giro comercial de la







## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 5761/2015/CA7

empresa y las operaciones lícitas -y eventualmente, las ilícitas- que allí se habrían llevado a cabo.

En efecto, se advierte que el Juez Federal N°3 de Córdoba, no ha examinado la responsabilidad penal de los imputados a la luz de los elementos secuestrados en los allanamientos, pese a que este Tribunal ya había indicado tal cuestión con fecha 18.12.2018 no solo en el voto del Dr. Ignacio María Vélez Funes -al que adhirió el suscripto en dicha oportunidad-, sino también en el pronunciamiento emitido por la Dra. Graciela Montesi, que en su momento propició revocar el sobreseimiento de los imputados en autos.

En este punto, en modo alguno puede soslayarse la importancia que puede derivar para la causa el examen de las registraciones de las cuentas comitentes **a los fines de descartar la utilización de personas físicas o jurídicas interpuestas**, puesto que de lo aquí se trata no es la constatación de la veracidad de las operaciones de compra y venta de bonos y acciones, **sino la licitud de los fondos utilizadas para efectuarlas.**

En tal sentido, insisto una vez más en traer a colación las consideraciones vertidas por este Tribunal en oportunidad de analizar los agravios vertidos por los recurrentes respecto de la resolución dictadas por el Juez Federal N° 1 de Córdoba.

En dicho pronunciamiento, la Dra. Graciela Montesi en su voto que propiciaba la revocatoria del sobreseimiento dictado, expuso que *"...la circunstancia de consignar en el informe una serie de operaciones bursátiles, que la contadora entiende constatadas, sin discriminar los capitales originales, no resulta ser una razón válida ni suficientes para calificar el estudio realizado por la*

---

Fecha de firma: 19/05/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#24640408#327518420#20220519131403960

*funcionaria del Organismo Fiscal, como carente de aptitud y valor probatorio".*

Asimismo, la magistrada también hizo referencia a una serie de irregularidades respecto de la registración de las cuentas comitentes, como ser las relacionadas con Jorge Palacio y otras cuentas y clientes, que por razones de brevedad me remito.

A tal fin será de suma utilidad la verificación de las identidades de los clientes que operaban con COMPAÑÍA DE INVERSIONES BURSÁTILES S.A., la verificación de los domicilios declarados, las actividades comerciales inscriptas ante AFIP, su capacidad económica y demás cuestiones que resulten conducentes y pertinentes para la averiguación de la verdad de los hechos. Concretamente, deberá profundizarse la investigación respecto de que Enrique Rubén Juncos además de ser titular de cuentas comitentes, también era empleado de COMPAÑÍA DE INVERSIONES BURSÁTILES S.A.

Por último, cabe agregar que aunque Juan Eduardo Arato, Ricardo Furlani, Claudio Horacio Sánchez y Javier Fernando Guevara Amado no se encuentran imputados en autos por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos, ni de otros delitos contra el orden económico y financiero, deberá efectuarse una profundización de la investigación que permita descartar que el origen de los fondos utilizados en sus cuentas comitentes no pertenezcan a ellos, sino a otras personas ocultas, para lo cual será de utilidad examinar el cumplimiento de las medidas de **debida diligencia** que se exige a los agentes de bolsa como COMPAÑÍA DE INVERSIONES BURSÁTILES S.A.

Máxime cuando es de público conocimiento que en los autos caratulados: "LEGAJO DE APELACIÓN de RODRIGO, EDUARDO DANIEL Y OTROS en autos: "RODRIGO, Eduardo Daniel y otros

Fecha de firma: 19/05/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#24640408#327518420#20220519131403960



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 5761/2015/CA7

por/ASOCIACION ILICITA, INF. ART. 310 - INCORPORADO POR LEY 26.733 en concurso real con DEFRAUDACIÓN POR RETENCIÓN INDEBIDA" (Expte. FCB 5650/2014/78); la Sala B de este Tribunal dispuso con fecha 18.9.2018 el procesamiento **Javier Fernando Guevara Amado** como partícipe necesario del delito de intermediación financiera no autorizada agravada (art. 310 1 y 3 párrafo del C. Penal) y supuesto autor del delito de lavado de activos agravado (art. 303 inc. 1 y 2 apartado a del C. Penal) -hecho 81- de conformidad a lo dispuesto en el art. 306 del CPPN.

En tal sentido, no pueden soslayarse las pautas emanadas del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) a través de sus reconocidas "Recomendaciones", de las que surge en forma clara la directiva de analizar el comportamiento de los sujetos obligados y de los clientes a través de un "Enfoque Basado en Riesgo" a fin de asegurar que las acciones llevadas a cabo para prevenir o mitigar el lavado de activos y la financiación del terrorismo sean proporcionales a los riesgos identificados.

En el caso que nos ocupa, es ineludible remitirse a la Recomendación N° 10 del GAFI en tanto establece como estándar internacional la obligatoriedad de tomar medidas de Debida Diligencia del Cliente (DDC) conforme las obligaciones que determine cada país.

A mayor abundamiento, dicha Recomendación indica que los sujetos obligados deben realizar una debida diligencia continua de la relación comercial y examinar las transacciones llevadas a cabo a lo largo de esa relación para asegurar que las transacciones que se realicen sean consistentes con el conocimiento que posee sobre el cliente, su actividad comercial y el perfil de riesgo, ~~incluyendo, cuando sea necesario, la fuente de los fondos.~~

Fecha de firma: 19/05/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#24640408#327518420#20220519131403960

En este punto, resulta de suma utilidad examinar el cumplimiento de las pautas que surgen del **"Código de Conducta"** y del **"Manual de Funciones y Procedimientos"** elaborados por los propios miembros de COMPAÑÍA DE INVERSIONES BURSÁTILES S.A. que fueron presentados ante la CNV al momento de solicitar su inscripción como Agente de liquidación y compensación (ALyC) (ver 11/24 del Expediente 334 AÑO 2014 asunto "COMPAÑÍA DE INVERSIONES BURSÁTILES S.A. s/ INSCRIPCIÓN ALyCP", CUERPO I y fs. 204/264 de Expediente 334 AÑO 2014 asunto "COMPAÑÍA DE INVERSIONES BURSÁTILES S.A. s/ INSCRIPCIÓN ALyCP", CUERPO II).

En dichos documentos se encuentran reflejadas las políticas de **prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo (PLA/FT)**, que debía implementar el agente de bolsa investigado en cumplimiento de las normas antilavado que, como ya se dijo se encuentran vigentes del año 2010.

Finalmente, tal como lo manifestó el representante de la querellante AFIP-DGI en su informe, de las intervenciones telefónicas efectuadas en autos surge que los encartados habrían efectuado triangulación de divisas extranjeras para ingresarlas y extraerlas del mercado nacional (ver fs. 1057 y 1059, 1394vta, 1395, 1416).

Asimismo, dichas circunstancias encuentran correlato de la prueba documental que fue glosada a los cuerpos pruebas pertinentes.

De su cotejo, se advierte diversa y abundante documentación atinente a datos de cuentas bancarias y beneficiarios radicados en el exterior, como así transferencias a empresas extrajeras (ver, por ejemplo fs. 93/106 del "CUERPO V- Cuerpo de pruebas en autos Brachetta, Gustavo Víctor y otros". Expte. 67671/14 (fs. 01/405).





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 5761/2015/CA7

Sobre la cuestión mencionada, debe destacarse que a partir de las Leyes 25.246 y 25.632 comenzó un proceso legislativo mediante el cual se fueron incorporando en forma paulatina a nuestro ordenamiento jurídico interno, los avances normativos suscitados en el ámbito internacional de la lucha contra el terrorismo y el lavado de activos, como resultado del compromiso del Estado Argentino ante la comunidad internacional de prevenir, investigar y sancionar aquellas conductas ligadas a su financiación.

Entonces, en base a las maniobras de lavado de activos de origen delictivo que aquí se investigan en el marco de una presunta organización criminal y, en virtud de los compromisos y Tratados Internacionales asumidos por nuestro país, **deberá remitirse copia certificada** de la presente resolución a la **Unidad de Información Financiera** en los términos del art. 6 inc. c) de la Ley 25.246 y de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional aprobado por Ley 25.632.

En suma, de acuerdo con todo lo expuesto, la circunstancias valoradas y tenidas por ciertas en la resolución recurrida para concluir en la desvinculación de los encartados del proceso -que, por cierto, lucen por demás controvertidas- y tampoco despejan en forma suficiente las dudas acerca de la responsabilidad penal de los implicados.

De acuerdo con lo explicitado hasta aquí, considero que asiste razón a los apelantes en el sentido de que el sobreseimiento dispuesto en las presentes actuaciones ha sido adoptado claramente de manera prematura, toda vez que restan examinar numerosos elementos de prueba que aún no han sido valorados y que permitirían constatar o descartar ~~la eventual existencia de la participación penalmente~~

Fecha de firma: 19/05/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#24640408#327518420#20220519131403960

responsable de los encartados en los hechos delictivos que aquí se les atribuyó en oportunidad de promoverse la acción penal.

**IV.** En definitiva, analizados los fundamentos brindados por el Juez para resolver como lo hizo y sopesados aquellos motivos con los argumentos expuestos por el recurrente, corresponde revocar el sobreseimiento dispuesto a favor de los imputados, debiendo el Juez instructor proseguir con la instrucción de la causa en los términos señalados en la presente resolución, para lo cual, atento el tiempo transcurrido, deberá imprimirse máxima celeridad al trámite de la presente causa.

Por las razones expuestas, estimo propicio la revocación de la resolución dictada con fecha 9 de noviembre de 2020 por el Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, en cuanto dispuso el sobreseimiento de los imputados Gustavo Víctor Brachetta, Gustavo Nicolás Brachetta, Santiago Brachetta, Alberto Rafael Bianchetta, Guillermo Borio, Enrique Rubén Juncos, Gabriel Alberto Ludueña, Leonardo Fabián Petiti y Gustavo Alberto Katz en orden a los delitos de **asociación ilícita** (art. 210 el C.P.) -hecho primero-, **lavado de activos** (art. 303 punto 1 del C.P.), agravado por habitualidad (punto 2 inc. a), -hechos segundo, tercero, cuarto, quinto, séptimo y noveno-, **asociación ilícita tributaria** (art. 15 inc. c) Ley 24.769 -hecho sexto-; por los que fueran indagados debiendo profundizarse la investigación en la presente causa de acuerdo con los lineamientos dados en la presente resolución (arts. 335 y 336, a *contario sensu*, del CPPN). Sin costas (conf. art. 530 y 531 del CPPN).

**La señora Juez de Cámara, Dra. Graciela Montesi, dijo:**

---

Fecha de firma: 19/05/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#24640408#327518420#20220519131403960



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 5761/2015/CA7

Que en razón de coincidir con los fundamentos expuestos por el señor Juez del primer voto Dr. Eduardo Avalos, me expido en igual sentido. Así voto.

**El señor Juez de Cámara Dr. Ignacio María Vélez Funes, dijo:**

Puestos los autos a despacho del Suscripto, debo comenzar el presente pronunciamiento señalando que comparto el criterio y solución adoptada por el Juez de Cámara de primer voto, Dr. Eduardo Avalos, quien propicia revocar -por ausencia de certeza negativa y prematura- la resolución dictada por el Juez Federal N° 3 de Córdoba en cuanto dispuso el sobreseimiento de los imputados Gustavo Víctor Brachetta, Gustavo Nicolás Brachetta, Santiago Brachetta, Alberto Rafael Bianchetta, Guillermo Borio, Enrique Rubén Juncos, Gabriel Alberto Ludueña, Leonardo Fabián Petiti y Gustavo Alberto Katz en orden a los delitos de **asociación ilícita** (art. 210 el C.P.) -hecho primero-, **lavado de activos** (art. 303 punto 1 del C.P.), agravado por habitualidad (punto 2 inc. a), -hechos segundo, tercero, cuarto, quinto, séptimo y noveno-, **asociación ilícita tributaria** (art. 15 inc. c) Ley 24.769 -hecho sexto-; por los que fueran indagados debiendo profundizarse la investigación en la presente causa de acuerdo con los lineamientos dados en la presente decisión (arts. 335 y 336, a *contario sensu*, del CPPN) y ordena proseguir la causa según su estado.

a) Tras analizar los argumentos de las partes recurrentes y los fundamentos de la resolución apelada a la luz de los elementos de prueba reunidos en el presente, considero que en autos no se verifica la certeza negativa exigida por la normativa procesal para adoptar un temperamento semejante.

---

Fecha de firma: 19/05/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#24640408#327518420#20220519131403960

Al respecto, cabe recordar que en función de lo previsto por el art. 335 del CPPN, el sobreseimiento constituye la clausura definitiva e irrevocable del proceso en relación al imputado en cuyo favor se dicta, lo cual implica exigir del órgano jurisdiccional un estado de convicción de tal magnitud que no deje duda alguna acerca de la extinción del ejercicio de los poderes de acción y jurisdicción, o de la inexistencia de responsabilidad penal del imputado con respecto al cual se dicte.

**La necesidad de certeza negativa para sobreseer a una persona con respecto a determinado hecho resulta un mandato procesal esencial, extremo que de momento, no se verifica en el caso hoy, por lo que debe continuarse con la investigación en los términos aquí señalados.**

La decisión recurrida resulta prematura pues aún existen medidas probatorias que, de producirse, podrían esclarecer la mecánica de los hechos investigados y dilucidar finalmente la responsabilidad penal o no de los involucrados.

A propósito de ello, con fecha 4 de mayo del corriente año solicité que por Secretaría se certifique, como medida para mejor proveer y mejor análisis, una serie de circunstancias relacionadas con determinados elementos de prueba colectados y con la materia de agravios de los recurrentes, (ver fs. 4820 de autos).

Como resultado de dicha certificación, el Actuario dejó sentado que: *“///tífico: del examen de los elementos de prueba que se encuentran resguardados en la caja nominada “25 DE MAYO n° 271, PISO 7, ALLANAMIENTO 11/09/15. BRACHETTA (FCB 5761/2015)”, se desprende que existe un total de cinco (5) sobres de papel madera, a saber: 1) Sobre de papel madera -identificado como “A”- que contiene en su interior, cuatro (4) aparatos*

Fecha de firma: 19/05/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#24640408#327518420#20220519131403960





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 5761/2015/CA7

telefónicos celulares; 2) Sobre de papel madera -identificado como "D"- que contiene en su interior Un (1) aparato celular; 3) Sobre papel madera -identificado como "E"- que contiene en su interior Un (1) aparato celular; 3) Sobre de papel madera -identificado como "F"- que contiene en su interior Un (1) aparato celular; 5) Sobre papel madera -identificado como "G"- que contiene en su interior Un (1) aparato celular. Los mencionados ocho (8) aparatos celulares que fueron secuestrados con fecha 11.9.2015 en el domicilio de calle 25 de Mayo 271, oficina "7" y aún no han sido desintervenidos, según constancias de autos. Los sobres en cuestión se encuentran cerrados y plasmadas las firmas de los funcionarios y testigos intervinientes debajo de la cinta adhesiva de 48mm sin que existan indicios que los mismos hayan sido abiertos ni violentados desde el día 11.9.2015, en que se procedió a su incautación. Asimismo, del examen de las presentes actuaciones se desprende que los puntos **II**, **III** y **V** de la resolución dictada por el Juez de la causa con fecha 9.11.2020 se dispuso, respectivamente, los sobreseimientos de los imputados respecto de los hechos relacionados con los delitos de **intermediación financiera no autorizada** (art. 310, primer párrafo del CP); de **encubrimiento** (art. 277, apartado 1 inc. b) del CP) y de **omisión de informar operaciones con valores negociables** (art. 311, segundo párrafo, del CP), no ha sido motivo de agravio y, por lo tanto, se encuentran firmes y consentidos por las partes. Secretaría de Cámara, 9 de mayo de 2022" (ver fs. 4822 de estas actuaciones).

De lo expuesto se desprende, por un lado, que al día de la fecha existen medidas de prueba pendientes de diligenciar, toda vez que respecto de los celulares que ~~fueron secuestrados con fecha 11.9.2015~~ en el domicilio de

Fecha de firma: 19/05/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#24640408#327518420#20220519131403960

calle 25 de mayo 271, oficina "7" -lugar donde habría funcionado una oficina oculta de CIBSA- todavía no se ha ordenado la desintervención de esos aparatos telefónicos.

Similares consideraciones debo efectuar respecto de los teléfonos celulares que obran resguardados en una caja en la Secretaría de este Tribunal, como ha sido certificado el 19.05.22 (fs. 4822).

Se trata de **veinticuatro (24) aparatos celulares**, (1) IPAD y un (1) PALM Tungsten que, aunque ya fueron desintervenidos de acuerdo con el detalle de los informes periciales, **resta la transcripción de la información que contiene a un soporte papel, para su posterior valoración.**

Advierto que se encuentran **pendientes de examen y valoración de sus contenidos** los aparatos electrónicos que a continuación se describe: **1)Informe pericial N° 1731638** (del 24.8.2015): Cuya información fue resguardada en el **Material N° 187412**, correspondiente a un disco compacto identificado como C5541451 I 1731538) y que contiene la información que fue extraída del Material N° 177205, correspondiente a un (1) teléfono celular marca Nokia, color negro, modelo 925.2, con tarjeta SIM de la empresa Personal N°89543420914503956697, IMEI 356697051154006; **2) Informe pericial N° 1731663** (del 26.8.2016): Cuya información fue resguardada en el **Material N° 219775** correspondiente a un disco compacto identificado como C 554145 I 173 1663) y que contiene la información que fue extraída del **Material N° 177221**, correspondiente a un teléfono celular marca LG KP 110, IMEI N° 011444001785010, sin tarjeta SIM, color blanco, sin tarjeta de memoria con batería; del **Material N° 177222**, correspondiente a un teléfono celular marca SIEMENS A56, IMEI N° 010348003441574, color negro despintado, sin tarjeta SIM y ~~sin tarjeta de memoria y del Material N° 177223: Un~~

Fecha de firma: 19/05/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#24640408#327518420#20220519131403960



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 5761/2015/CA7

teléfono celular marca SAMSUNG GTE 2120 L, IMEI N1 010348003441574, color negro despintado, sin tarjeta SIM y sin tarjeta de memoria, con batería; **3) Informe pericial N° 1731284** (del 21.10.2016 ): Cuya información fue resguardada en el **Material N° 219775** correspondiente un DVD aportado e identificado como C 554145 I 1731284) y que contiene la información que fue extraída del Material N° 177119, correspondiente a un celular marca SAMSUNG, modelo SM-G355M, IMEI N° 354688061489765, con tarjeta MICRO SIM de la empresa "Claro" N° 89543181432737742112, color negro, sin tarjeta de memoria y con batería; y del Material N° 177120: correspondiente a un teléfono celular marca APLE, modelo A1533, con una tarjeta Micro SIM recortada, sin número visible, IMEI N° 358752050569742, color plateado. **4) Informe pericial N° 1731659** (del 19.9.2016): Cuya información fue resguardada en el **Material N° 222224** correspondiente a un DVD identificado como C 554145 I 173 1659) y que contiene la información que fue extraída del Material N° 177219, correspondiente a un teléfono celular marca MOTOROLA Nextel, modelo Titanium, IMEI N° 002400105105940, con tarjeta Micro SD de 2 GB, una tarjeta SIM de la empresa Nextel N° 000814483865310, con batería, color negro. **5) Informe pericial N° 173302** (del 5.9.2016): Cuya información fue resguardada en el **Material N° 221799** correspondiente a un DVD aportado e identificado como C554145 I 1731302) y que contiene la información que fue extraída del Material N° 177134, correspondiente a un IPAD, color plateado, modelo A1219, con funda protectora de color negro, Serial N° GB0144LNZ39; **6) Informe pericial N° 1731619** (del 15.9.2016): Cuya información fue resguardada en el **Material N° 230249** correspondiente a un DVD aportado e identificado como 554145 I 1731619) y que contiene la ~~información que fue extraída del Material N° 177195,~~

Fecha de firma: 19/05/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#24640408#327518420#20220519131403960

correspondiente a un teléfono celular marca SAMSUNG, modelo GT -191190, IMEI N° 358058050062856, tarjeta SIM de la empresa Personal N° 89543420713388856463, sin tarjeta de memoria y con batería; del Material N° 177196, correspondiente a un teléfono celular marca SAMSUNG, modelo GT-B5510L, IMEI N° 359572040221355, tarjeta SIM de la empresa Personal N° 89543420312195602903, con tarjeta de memoria Micro SD de 2 GB, sin batería y del Material N° 177197, correspondiente a un teléfono celular marca MOTOROLA Nextel, modelo Titanium, IMEI N° 002400144356940, con tarjeta SIM de la empresa NEXTEL N° 001802791262360, con tarjeta MicroSD de 8 GB, con batería; **7) Informe pericial N° 1731656** (del 22.9.216): Cuya información fue resguardada en el **Material N° 224155** correspondiente a un DVD aportado e identificado como C 554145 I 1731656) y que contiene la información que fue extraída del Material N° 177216, correspondiente a un teléfono celular marca SONY, modelo XPERIA, color negro, con cubierta de goma color negra, con batería, tarjeta Micro SIM de la empresa Movistar N° 8954078100638272810; **8) Informe pericial N° 1731288** (del 9.1.2017): Cuya información fue resguardada en el **Material N° 232382** correspondiente a un CD aportado e identificado como C 554145 I 1731288) y que contiene la información que fue extraída del Material N° 177121, correspondiente a un teléfono celular marca SAMSUNG, modelo GT - E1205L, IMEI N° 01328500307894, con tarjeta SIM de la empresa Claro N° 8954310143568872033 HLR5, con materia de la misma marca y tapa posterior; del Material N° 177122: correspondiente a un teléfono celular marca SAMSUNG, modelo GT - E3300I, IMEI cuyo n° no es visible, con tarjeta SIM de la empresa Claro N° 8954310143568871555 HLR5, con tapa posterior, sin tarjeta de memoria y con batería de la misma ~~marca y del Material N° 177123: Un teléfono celular marca~~

Fecha de firma: 19/05/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#24640408#327518420#20220519131403960



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 5761/2015/CA7

NOKIA, modelo E5-00.2, IMEI N° 357920040125948, sin tarjeta SIM y sin memoria externa, con batería de la misma marca y tapa posterior; **9) Informe pericial N° 1731298** (del 11.1.2017): Cuya información fue resguardada en el **Material N° 323660**, correspondiente a un DVD aportado e identificado como C 554145 I 1731298) y que contiene la información que fue extraída del Material N° 177130, correspondiente a un teléfono celular marca MOTOLORA, con una cinta que reza "TREBIN". Modelo 1205, IMEI N° 000600181106340, con tarjeta SIM de la empresa Nextel N° 333805800688310, sin tarjeta de memoria y con batería de la misma marca; del Material N° 177131, correspondiente a un teléfono celular marca MOTOLORA Nextel, modelo I418, IMEI 102100427944040, con tarjeta SIM de la empresa Nextel N° 001806586362360, sin tarjeta de memoria, con batería de la misma marca y tapa posterior y del Material N° 177132, correspondiente a un teléfono celular marca BLAKBERRY, de color blanco, con funda transparente, modelo 9900, IMEI N° 3585660433970134, sin tarjeta SIM, con tarjeta de memoria de 2 GB, batería de la misma marca y tapa posterior; **10) Informe pericial N° 173278** (del 24.9.2018): Cuya información fue resguardada en el **Material N° 40895** correspondiente a un DVD aportado e identificado como 554145 Inf. 1731278) y que contiene la información que fue extraída del Material N° 177111, correspondiente a un celular marca BLACKBERRY, modelo 8520, IMEI 355283049168506, sin tarjeta SIM, sin tarjeta de memoria y sin batería; del material N° 177112, correspondiente a un celular marca BLACKBERRY, modelo 9320, IMEI 358456051415851, con tarjeta SIM CTI móvil N° 8954-6073432049571 con tarjeta de memoria de 1 GB con batería; del Material N° 177113, correspondiente a un celular marca MOTOROLA, modelo V3, color negro, IMEI 359190009260379, sin tarjeta SIM, con batería, sin memoria tarjeta y del

Fecha de firma: 19/05/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#24640408#327518420#20220519131403960

Material N° 177114, correspondiente a un teléfono celular marca BLACKBERRY, modelo 9320, IMEI 355571059457722, con una tarjeta de memoria de 2GB y una tarjeta MICRO-SIM recortada sin número visible con adaptador y con batería, color blanco; **11) Informe pericial N° 173615** (del 14.9.2018): Cuya información fue resguardada en el **Material N° 405388** correspondiente a un DVD identificado como 554145 Inf. 1731278) y que contiene la información que fue extraída del Material N° 177190, correspondiente a un celular marca BLACKBERRY, modelo 8520, IMEI 355283049168506, sin tarjeta SIM, sin tarjeta de memoria y sin batería; del Material N° 177191, correspondiente a un celular marca una tarjeta de memoria Micro SD SanDisk de 2GB con adaptador MOTOROLA; del Material N° 177192, correspondiente a un dispositivo PALM Tungsten/c, N° de serie no visible, de color gris y del Material N° 177193, correspondiente a un celular marca BLACKBERRY, modelo 83501, IMEI N° 010002497876820, sin tarjeta SIM, el cual contiene un papel de color celeste adherido con cinta, con batería y sin tarjeta de memoria.

En virtud de todo lo expuesto hasta aquí, cabe concluir que la decisión cuestionada, **ha sido adoptada a todas luces de manera prematura, toda vez que restan incorporar y analizar diversos elementos de prueba que pueden resultar concluyentes a los fines de determinar la responsabilidad penal de los imputados.**

Repárese en tal sentido, que de acuerdo con las escuchas telefónicas efectuadas en el marco de estos actuados, los supuestos miembros de la organización habrían omitido realizar llamadas telefónicas por el temor de estar siendo investigados por la justicia.

En efecto, por precaución o miedo a ser descubiertas, las personas investigadas en autos habrían ~~cambiado de número telefónico en forma recurrente, en~~

Fecha de firma: 19/05/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#24640408#327518420#20220519131403960



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 5761/2015/CA7

**especial, Gustavo Brachetta (padre o hijo) y Guillermo Borio.**

Ello surge con claridad de las intervenciones telefónicas, donde **Santiago Brachetta** le manifestó a una persona de sexo femenino -quien podría ser una tía- que: **"1- bueno, otra cosa, vos sabes que cuando no me atendías vo el, el teléfono, e... llamé a Gustavo Borio me dijeron que el celular no, no corresponde a él, lo, lo llame a Gustavo tampoco me, me pude comunicar. 2- e, que raro che, porque es ca, pasa que ellos, ello nos, sabes que pasa Ladis? Que por el tema este delos controles van cambiando de teléfono permanentemente"** (ver llamada identificada como "B-11003-2014-11-11-101829-22" obrante a fs. 1095, el resaltado es mío).

b) Del mismo modo, de la conversación efectuada entre **Alberto Rafael Bianchetta** y una persona de voz femenina, se puede extraer: **"1- si toti. 2- amigo hay que tener cuidado flaco he me han dicho que están dando vuelta eh. 1- ah sí bueno dale"** (ver llamada del 23.10.2014, obrante a fs. 1801).

Como puede observarse de las consideraciones efectuadas, resulta evidente la trascendencia de proceder a la valoración de la información de los treinta y dos (32) aparatos telefónicos secuestrados en los allanamientos respectivos.

Cabe aclarar que **no debe confundirse que la consecución de la investigación penal** en los presentes autos no se circunscribe a los hechos relacionados con los delitos de **intermediación financiera no autorizada** (art. 310, primer párrafo del CP); de **encubrimiento** (art. 277, apartado 1 inc. b) del CP) y de **omisión de informar operaciones con valores negociables** (art. 311, segundo párrafo, del CP) ~~que tal como surge de la certificación~~

Fecha de firma: 19/05/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#24640408#327518420#20220519131403960

actuarial solicitada por el suscripto -y que obra transcripta precedentemente- no ha sido motivo de agravio en los presentes y, por lo tanto, se encuentran firmes y consentidos por las partes.

En rigor y claramente, el objeto de los recursos de apelación respectivos en estos actuados del Fiscal y querellante se refiere a los ilícitos relacionados con el hecho primero, de **asociación ilícita** (art. 210 el CP); hechos segundo, tercero, cuarto, quinto, séptimo y noveno de **lavado de activos** (art. 303 punto 1 del CP) **agravado por habitualidad** (punto 2 inc. a) y el hecho sexto de **asociación ilícita tributaria** (art. 15 inc. c) Ley 24.769, hoy art. 15, inc. c) del régimen penal tributario previsto por el art. 279 de la Ley 27.430) y sobre esto es hoy la presente decisión.

c) El estado de la investigación antes expuesto me permite afirmar que en el presente caso no se ha alcanzado la **certeza necesaria y concluyente** para disponer el sobreseimiento, para lo cual resulta ineludible y pertinente ordenar, incorporar y ponderar en forma previa e íntegra las diligencias probatorias pendientes y esclarecer la instrucción de la causa en relación a las conductas por las cuales oportunamente se promovió acción penal en contra de los imputados, por lo que debe continuarse con el trámite de la presente causa.

Cabe traer a colación que el derecho a la "**tutela judicial efectiva**" comprende tres momentos: **1)** La libertad de acceso a la justicia, eliminando los obstáculos procesales que pudieran impedirlo; **2)** El derecho de obtener una sentencia de fondo, es decir motivada y fundada, en un tiempo razonable, más allá del acierto de dicha decisión y, **3)** Que la sentencia final se cumpla después de quedar ~~firme o sea, la ejecutoriedad plena posterior del fallo.~~

Fecha de firma: 19/05/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#24640408#327518420#20220519131403960





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 5761/2015/CA7

La continuidad en la tramitación de los presentes ser relaciona, específicamente con el segundo momento, como señalo antes.

Entonces, el ejercicio del derecho a la **tutela judicial efectiva** se traduce en el derecho a obtener una sentencia sobre el fondo de la cuestión, lo que no significa que la decisión sea favorable a la pretensión formulada, sino justa, razonable, sobre todas las cuestiones fácticas y jurídicas -amparadas en el derecho vigente- que fueron objeto de debate y motivada en base a las pruebas legalmente colectadas.

Esto incluye la **garantía del debido proceso** que busca la protección de los individuos, para que se resuelvan con la máxima justicia posible las controversias que se susciten entre dos partes y, en lo que a los procedimientos penales interesa, la culpabilidad o inocencia de una persona.

Este derecho es para todas las partes. Es decir, debe ser garantizada a toda persona, por igual, independientemente de su condición como parte acusadora, acusado o incluso tercero en el marco de un proceso.

En cuanto al deber de **resolver en plazo razonable**, cabe traer a colación que el trascurso del tiempo -sin una debida definición de la situación procesal- como indudablemente afecta la posibilidad de obtener y presentar pruebas que esclarezcan los hechos y determinen las responsabilidades, por sí mismo configura una violación de las garantías judiciales.

En consecuencia, los jueces, como rectores de los procesos, deben procurar su celeridad, para lo cual deberán dirigirlos y encausarlos de modo tal de impedir dilaciones y entorpecimientos indebidos.

---

Fecha de firma: 19/05/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#24640408#327518420#20220519131403960

Según los intereses jurídicos protegidos de la sociedad toda, en la presente causa se persigue la presunta comisión de graves delitos contra el orden público, el orden económico y financiero y la hacienda pública.

Por tanto, el principio de tutela judicial efectiva se vincula, además, al Estado de derecho, que se caracteriza por el sometimiento de todos los individuos, sin excepciones a la ley e igualdad de trato, de manera que nada ni nadie pueda estar por encima de ella y a la sociedad en su conjunto que reclama respuestas concretas contra las lesiones de estos bienes jurídicamente tutelados.

d) En orden a la naturaleza y gravedad de las maniobras presuntas que se encuentran siendo investigadas en estas actuaciones, corresponde tener presente que, en consonancia con la postura asumida por el suscripto en autos **"LEGAJO DE APELACIÓN EN AUTOS AZAR, MARTÍN Y OTROS POR ASOCIACIÓN ILÍCITA"** (Expte.: FCB 70549/2018/30/CA18); **Resolución del 31.5.2021**, en el año 2000 se suscribió en Palermo la **Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional**, cuyo texto fue aprobado por nuestro país mediante la **Ley 25.632** (B.O. 30.8.2002), a través de su participación directa en diversos foros internacionales, como el Grupo de los 20 (G-20) y el Grupo de Acción Financiera (GAFI), entre otros.

Debe tenerse en cuenta también que la **Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional** aprobada por la ley citada precedentemente que en el art. 4 dispone **"Los Estados Parte se esforzarán por establecer y promover la cooperación a escala mundial, regional, subregional y bilateral entre las autoridades judiciales, de cumplimiento de la ley y de reglamentación financiera a fin de combatir el blanqueo de dinero"**.

Fecha de firma: 19/05/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#24640408#327518420#20220519131403960



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 5761/2015/CA7

Asimismo, en nuestro país desde el año 2000, mediante **Ley 25.246** (sanción con fecha 13.4.2000 y promulgación el 5.5.2000) **se tipificó el lavado de activos de origen delictivo** y se dispuso mecanismos de prevención y sanción de dichas actividades **mediante la creación de la Unidad de Información Financiera.**

Luego, la **Ley 26.268** amplió la competencia del organismo mencionado y, finalmente, por medio del dictado de la **Ley 26.683** (B0 21.6.2011) se derogó el artículo 278 del Código Penal y se plasmó de forma definitiva el actual 303 del cuerpo legal precitado.

Vale hoy traer a colación las expresiones vertidas por Juan Carlos Reynaga cuando expuso que *"...el rol trascendente que cumple la Unidad de Información Financiera en la búsqueda y persecución de los delitos vinculados al lavado de activos, es acordado por casi todo el arco político acerca de la necesidad de que este organismo funciones de manera autónoma e interconectada con los diversos órganos del estado, más específicamente con el Poder Judicial, a fin de lograr un desarrollo eficiente y eficaz de la labor de persecución, juzgamiento y condena de los autores de delitos vinculados con el lavado de dinero"* (Reynaga, Juan Carlos. **"Crimen organizado y delitos federales complejos"**. Ed. Alveroni, Córdoba, año 2018, pág. 190, el resaltado es mío).

En función de cumplimentar en forma acabada con los compromisos internacionales asumidos por nuestro país con otros Estados Parte de esos tratados internacionales sobre lucha contra el crimen organizado transnacional a los que el suscripto ya hizo referencia, considero pertinente y necesario **remitir copia** de la presente resolución a la **Unidad de Información Financiera en los términos del art. 6 inc. c) de la Ley 25.246** a los efectos que estime útil.

Fecha de firma: 19/05/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#24640408#327518420#20220519131403960

En conclusión, por todo lo expuesto adhiero a los me pronuncio en el mismo y fundamentos brindados por el señor Juez del primer voto Dr. Eduardo Avalos. Así voto.

Por ello;

**SE RESUELVE:**

**I. REVOCAR** la resolución dictada con fecha 9 de noviembre de 2020 por el Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, en cuanto dispuso el sobreseimiento de los imputados **Gustavo Víctor Brachetta** (DNI 8.498.061), **Gustavo Nicolás Brachetta** (DNI 25.755.032), **Santiago Brachetta** (DNI 28.428.828), **Alberto Rafael Bianchetta** (DNI 12.249.265), **Guillermo Borio** (DNI 24.884.276), **Enrique Rubén Juncos** (DNI 17.001.096), **Gabriel Alberto Ludueña** (DNI 21.395.328), **Leonardo Fabián Petiti** (DNI 20.872.015) y **Gustavo Alberto Katz** (DNI 18.173.794) en orden a los presuntos delitos de **asociación ilícita** (art. 210 el C.P.) -hecho primero-, **lavado de activos** (art. 303 punto 1 del C.P.), agravado por habitualidad (punto 2 inc. a) -hechos segundo, tercero, cuarto, quinto, séptimo y noveno-, **asociación ilícita tributaria** (art. 15 inc. c) Ley 24.769 -hecho sexto-; por los que fueran respectivamente indagados debiendo profundizarse la investigación en autos de acuerdo con las observaciones dados en la presente resolución (arts. 335 y 336, a *contario sensu*, del CPPN). Sin costas (conf. art. 530 y 531 del CPPN).

**II. Remitir copia certificada** de la presente resolución a la **Unidad de Información Financiera** en los términos del art. 6 inc. c) de la Ley 25.246 y de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional aprobado por Ley 25.632, a los efectos que puedan corresponder.

**III. Recomendar** al Juez Federal N° 3 de Córdoba ~~interviniente que imprima la mayor celeridad posible a la~~

Fecha de firma: 19/05/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#24640408#327518420#20220519131403960



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 5761/2015/CA7

instrucción de la causa, a fin de permitir el descubrimiento de la verdad real y la pronta definición de la situación procesal de los imputados.

**IV.** Regístrese y hágase saber. Cumplimentado publíquese y bajen.

EDUARDO AVALOS  
JUEZ DE CAMARA

GRACIELA MONTESI  
JUEZ DE CAMARA

IGNACIO MARIA VELEZ FUNES  
JUEZ DE CAMARA

MARIO R. OLMEDO  
SECRETARIO DE CÁMARA

---

Fecha de firma: 19/05/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#24640408#327518420#20220519131403960